



FORMA 153

**AMPARO EN REVISIÓN 249/2002.
QUEJOSO: GRUPO RADIOPOLIS, S.A. DE
C.V.**

**MINISTRO: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al
quince de noviembre de dos mil dos.

Vo. Bo.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

Cotejó:

PRIMERO. Por escrito presentado el doce de noviembre de
dos mil uno en la Oficina de Partes Común de los Juzgados de
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Grupo
Radiopolis, sociedad anónima de capital variable, a través de su
representante legal, solicitó el amparo y la protección de la
Justicia Federal en contra de los actos y respecto de las
autoridades que a continuación se indican:

**"AUTORIDADES RESPONSABLES: Fungen como
autoridades responsables en el presente juicio de
garantías las siguientes:--- A) El Congreso de la
Unión.--- B) El Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos.--- C) El Secretario de**

Gobernación.--- D) El Secretario de Hacienda y Crédito Público.--- E) El Secretario de Salud.--- F) El Presidente del Servicio de Administración Tributaria.--- G) El Director del Diario Oficial de la Federación.--- H) El Director de Juegos y Sorteos, dependiente de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.--- I) El Jefe de Departamento del Área de Sorteos, C.P. José Alejandro Agis Lozado, adscrito a la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación."

"ACTOS RECLAMADOS: A) Del Congreso de la Unión, se reclama:--- 1. La aprobación y expedición del Decreto por el que se crea la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947, específicamente por lo que toca a los artículos 5° y 6°.--- B) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama:--- 1. La promulgación del Decreto a que se refiere el numeral 1 que antecede.--- C) De los Secretarios de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y, de Salud, se reclama:--- 1. El refrendo del Decreto presidencial mediante el cual fue promulgada la Ley Federal de Juegos y Sorteos.--- D) Del Presidente del Servicio de Administración Tributaria, así como del Secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclama:--- 1. La recepción de la Declaración General de Pago de Productos y



Aprovechamientos, presentada por mi mandante con fecha 18 de octubre de 2001, mismo que consiste en el primer acto de aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.--- 2. Por vía de consecuencia, la aplicación y ejecución en detrimento de las garantías de la peticionaria de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.--- E) Del Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama:--- 1. La publicación del ordenamiento reclamado y en particular sus artículos 5° y 6°, en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1947.--- F) Del Director de Juegos y Sorteos dependiente de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, se reclama:--- 1. La expedición del permiso No. S-1078-2000 de fecha 22 de octubre de 2001, a favor de mi mandante por el sorteo denominado 'LA HORA KE-BUENA', únicamente por lo que corresponde a la aplicación directa y concreta en perjuicio de mi mandante del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.--- El presente acto únicamente se reclama por lo que toca a la aplicación en perjuicio de la quejosa del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sin que específicamente se reclame algún otro numeral en sí o se reclame el permiso en mención por algún vicio propio, circunstancia que debe entenderse en el sentido de que de ser amparatoria la sentencia que derive del presente juicio

constitucional, únicamente se deberá referir al numeral en cuestión sin que específicamente se invalide el permiso antes citado.--- G) Del Jefe de Departamento del Área de Sorteos, se reclama:--- 1. La orden verbal de pago efectuada en presencia de uno de los autorizados de mi mandante y posteriormente, vía telefónica, a efecto de que en términos de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, RADIOPOLIS efectuara el pago de \$1,211.00, por concepto de participación que de los 'supuestos' productos obtenidos por mi mandante debía corresponder al Gobierno Federal."

SEGUNDO. La parte quejosa narró como antecedentes los siguientes:

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados son los siguientes: - - - 1.- Mi representada es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos , que organiza, eventualmente, juegos y sorteos. 2.- La organización de juegos y sorteos en la República Mexicana sitúa a RADIOPOLIS, bajo la regulación específica de entre otras, la Ley Federal de Juegos y Sorteos ("LFJS"). 3.- La LFJS señala que corresponde al Gobierno Federal, por conducto



de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos y sorteos. 4.- Específicamente, dentro del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (artículos 8° y 14, fracción XVII), está conferida esta facultad a la Dirección General de Gobierno, misma que en auxilio de sus actividades específicamente la atribuye a la Dirección de Juegos y Sorteos, autoridad ésta que se encarga de la expedición de los permisos y/o autorizaciones a que alude la LFJS. - - - 5. Los artículos 5° y 6° de la LFJS, que por esta vía se reclaman, obligan a toda aquella persona que en la República Mexicana organice un juego o sorteo, además de obtener el permiso respectivo por parte de la Secretaría de Gobernación, a participarle al Gobierno Federal, esto es, a pagarle un monto determinado por la propia Secretaría de Gobernación, que se obtiene de los productos (sic) o bien, rendimientos que el permisionario obtenga por la celebración del evento que se trate. - - - El texto de tales numerales es el siguiente: - - - "Artículo 5°.- En los permisos que conceda independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia,

dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que se otorguen. - - Artículo 6°.- Lo dispuesto en el artículo 5° se aplicará también en relación con los permisos que se concedan para efectuar sorteos, con excepción de los siguientes: - - - ...” - - - 6. **Ahora bien, en la especie los días 17 de septiembre, 3 y 18 de octubre de 2001, mi mandante presentó diversos escritos ante la Dirección de Juegos y Sorteos de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, por lo que solicitó autorización y/o permiso para organizar el sorteo denominado ‘LA HORA KE-BUENA’, con vigencia del 29 de octubre al 12 de noviembre del 2001. - - - 7. Desde el día 17 de septiembre de 2001 fecha en la que se presentó el primer escrito de mi mandante ante la Dirección General de Gobierno, Dirección de Juegos y Sorteos – se le indicó de forma verbal a los autorizados de Radiópolis, por parte de varios funcionarios de la Dirección de Juegos y Sorteos, que la quejosa tendría que hacer un pago en términos de los artículos 5° y 6° de la LFJS a efecto de que le fuera expedido, sin ningún problema, el permiso que solicitaba. - - - 8. Con el objeto de obtener certeza respecto de las obligaciones que específicamente le imponía la LFJS con motivo de la organización del sorteo precisado a lo largo de esta demanda y en específico aquellas a que se refería la autoridad de manera verbal (obligación de**



pago), mi mandante se avocó al análisis de los numerales precitados; sin embargo, se percató que ni el artículo 5° ni el 6°, tenían parámetro alguno, ni de forma, ni de modo, ni de tiempo, que estableciera a ciencia cierta el monto que la autoridad le podría cobrar, la forma ni el momento en que tendría que pagar y sobre todo, la mecánica conforme a la cual se calcularía la cantidad a que aludían los funcionarios de la Dirección de Juegos y Sorteos, como obligatoria para Radiopolis. - - - 9. Dado que los numerales indicados por la autoridad no establecían los elementos antes citados, tales como fecha de pago, monto específico de pago y mecánica de cálculo del pago a cargo de mi mandante, con fecha 3 de octubre de 2001 Radiopolis ingresó un escrito ante la Dirección de Juegos y Sorteos a través del cual pidió de forma respetuosa, pacífica y por escrito, se le indicara el monto específico que le correspondería cubrir con motivo de la organización del sorteo respectivo, así como el fundamento legal en que se sustentaba dicho cargo. - - - 10. La autoridad fue omisa en dar contestación a la petición de mi mandante y con el objeto de evitar dilaciones en la expedición del permiso, con fecha 18 de octubre de 2001 el C. Jaime Enrique Basurto Rosas, persona autorizada por mi mandante para notificarse, entregar y recibir documentos relativos a trámite de la obtención del permiso antes mencionado -autorización que

100
C
2 L
O I
DE 7

consta en los diversos escritos que se ingresaron ante esa H. Autoridad- compareció directamente con el C. Jefe de Departamento del Área de Sorteos, quien de viva voz le indicó que el permiso solicitado por Radiopolis estaría próximo a expedirse; sin embargo, para que esto fuera así era necesario que la peticionaria pagara una cantidad igual a \$1,211.00, en términos de lo previsto por los artículos 5° y 6° de la LFJS. - - - 11. Con esa misma fecha 18 de octubre de 2001, la C. Marcela Orihuela Luna, quien también está autorizada en los términos antes precisados, estableció comunicación vía telefónica con la misma autoridad a efecto de corroborar específicamente el monto sujeto a entero por parte de mi representada. Vía telefónica se le reiteró que **RADIOPOLIS** debía cubrir por concepto de participación a que se refieren los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos la cantidad de \$1,211.00 M.N. (un mil doscientos once pesos 00/100 moneda nacional). - - - 12. Con fecha 18 de octubre de 2001, mi mandante realizó el pago en comento mediante Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos forma fiscal oficial No. 16, presentada ante la oficina autorizada para tales efectos. - - - 13. Como consecuencia del pago efectuado y según lo había condicionado la autoridad citada en el numeral 7. que antecede, con fecha 22 de octubre de 2001, el C. Director de



Juegos y Sorteos, con fundamento en el artículo 5° (entre otros) resolvió otorgar el permiso No. S-1078-2001 a favor de mi mandante. - - 14. El sorteo respectivo se organizó y realizó (el 12 de noviembre de 2001) por Radiopolis conforme a la mecánica autorizada por la Secretaría de Gobernación a través del permiso número S-1078-2001, con la participación de los radioescuchas del programa "LA HORA KE-BUENA". - - - 15. Toda vez que a juicio de Radiopolis, los artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y en especial el 5° y 6° antes precisados devienen en inconstitucionales y/o de las garantías de audiencia, seguridad jurídica, destino de las contribuciones al gasto público y los de proporcionalidad y equidad en material tributaria, por conducto del suscrito la empresa quejosa interpone en tiempo y forma legales, la presente demanda de amparo".

TERCERO. El peticionario de garantías señaló que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales que se encuentran tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los siguientes conceptos de violación:

"PRIMERO. Inconstitucionalidad de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (en adelante "LFJS"), concretamente en sus artículos 5° y 6°, debido a la inseguridad jurídica que ocasionan en perjuicio de

mi mandante, hoy quejosa, ante la ausencia de parámetros a los que debe ajustarse la participación que los productos obtenidos por los organizadores de juegos y sorteos en la República Mexicana debe corresponder al Gobierno Federal; participación ésta que como facultad le corresponde señalar de forma arbitraria a la Secretaría de Gobernación. - - - Este precepto infringe en perjuicio directo de la quejosa los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que permite a la autoridad administrativa incurrir en excesos en cuanto a la facultad de determinar la participación que corresponde al Gobierno Federal de los productos que obtenga mi mandante. - - - El artículo 1º constitucional establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la propia Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos con las condiciones que ella misma establece. - - - La parte conducente del artículo 14 constitucional señala: - - - "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". - - - Una de las garantías que otorga la Ley Suprema a favor del gobernado es precisamente la garantía de legalidad



que contempla el artículo 16 que a la letra consigna: - - "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". - - - El artículo 16 de nuestra Constitución es uno de los preceptos que imparten mayor protección a cualquier gobernado, sobre todo a través de la garantía de legalidad que consagra, la cual, dadas su extensión y efectividad jurídicas, pone a la persona a salvo de todo acto de mera afectación a su esfera de derecho que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca. - - - Respecto de las garantías de fundamentación y motivación establecidas en el artículo 16 constitucional, el Poder Judicial Federal, ha interpretado lo siguiente: - - - "FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN. (Se transcribe) - - - 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.- (Se transcribe).- - - Asimismo, queda demostrado que las garantías de fundamentación y motivación tienen por objeto proporcionar a los particulares seguridad jurídica en relación a los actos de autoridad que pudieran ejercitarse en su perjuicio, mediante el establecimiento de márgenes dentro de los cuales debe actuar la autoridad. - - -



CORTE DE
LA NACIÓN
A SALA
E ACUERDOS

El Poder Judicial ha establecido la siguiente interpretación de las garantías de fundamentación y motivación en tratándose de leyes. - - -

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA". (Se transcribe). - - -

ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.- *El requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 constitucional, al tener el rango de una garantía individual implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría que éstas sean, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución, de manera que sus actos no aparezcan emitidos arbitrariamente. - - - Si bien es cierto que la autoridad legislativa no está obligada a respetar las garantías de fundamentación y motivación en los mismos términos que deben ser respetadas por actos de autoridad diversa a ésta, sí debe cumplir con dos requisitos constitucionales esenciales. El primero de ellos consiste en que la autoridad legislativa esté constitucionalmente facultada para crear las disposiciones legales correspondientes, y en segundo término, su acto legislativo debe referirse a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas. - - - En consecuencia, el artículo 16 constitucional prohíbe a las autoridades, de cualquier clase o rango que éstas sean, expedir o crear actos que dejen a los particulares en estado de inseguridad jurídica. - - - Se insiste, el artículo 16 constitucional debe ser respetado por la autoridad*



legislativa, tal como se advierte de la siguiente jurisprudencial dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. - - - "EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN". (Se transcribe). - - - Esta obligación impuesta al legislador federal representa el aspecto sustantivo de la garantía de seguridad jurídica a favor de los gobernados, para que al ser aplicadas las facultades otorgadas por la ley que crean, aquéllos no sufran una afectación en su esfera jurídica, derivada de los excesos en que las autoridades incurran con motivo de las facultades oscuras y ambiguas conferidas. - - - Aplicando las anteriores consideraciones al caso concreto de los artículos 5° y 6° de la LFJS, se puede concluir de forma indubitable que dichos numerales devienen en inconstitucionales por violar las garantías de legalidad y seguridad jurídica ya que el particular, en este caso la quejosa, desconoce de forma específica, cierta y concreta, los parámetros conforme a los cuales se calculará esa 'participación' que de los productos que obtenga el permisionario le corresponde al Gobierno Federal, lo que genera un estado de incertidumbre e inestabilidad jurídica lo cual es inaceptable en un Estado de Derecho como el nuestro. - - - Es decir, los numerales de mérito no delimitan con claridad y



precisión los parámetros a los que las autoridades administrativas, que en el caso en particular es la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Dirección General de Gobierno, deberá ajustarse en cuanto concierne al ejercicio de la facultad de determinar el monto de la participación que de los productos obtenidos por el organizador del sorteo deba corresponder al Gobierno Federal. - - - A fin de exponer con mayor claridad el presente concepto de violación a continuación se transcribe el artículo 5° y la parte que interesa del artículo 6° tildados de inconstitucionales: - - - 'Artículo 5°.- En los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que se otorguen. - - Artículo 6°.- Lo dispuesto en el artículo 5° se aplicará también en relación con los permisos que se concedan para efectuar sorteos...' - - - Mi mandante efectuó un sorteo y en tal virtud estaba obligada en términos del artículo 5° en relación con el 6°, cuya parte conducente apenas se transcribió. - - De la simple



lectura que se haga de dichos preceptos, se puede concluir que la facultad conferida a la autoridad administrativa en cuanto a la libre determinación de la participación de los productos obtenidos por el permisionario es violatoria de las garantías de seguridad y certeza jurídicas ya que no se señalaron parámetros de modo, tiempo, lugar, cantidad, etc., conforme a los cuales dicha facultad se debía ejercer. - - - Lo que en todo caso debió hacer el legislador es señalar de forma concreta y clara la facultad conferida a la autoridad administrativa, sujetándola a directrices tales como el modo en que se realiza el cálculo de la participación que corresponda, si es un porcentaje, una cuota fija o progresiva, cuándo o en qué momento lo puede determinar, si es antes, durante o después de celebrado el evento; sobre qué monto de los productos obtenidos puede determinar dicha participación; conforme a qué parámetros, ya que lo cierto es que el libre albedrío de la autoridad es el que determina específicamente el monto sujeto a entero por parte de los particulares. - - - Los numerales antes citados fueron aplicados de forma directa en perjuicio de mi representada a través del permiso que se adjunta a la presente y a través del pago que en su momento efectuó mi representada y cuyos datos respectivos constan en la declaración oficial que se adjunta a la presente. - - - Dichos preceptos de la Ley Federal de Juegos y

Sorteos resultan inconstitucionales al no establecer las directrices a que deben sujetarse las facultades conferidas a la Secretaría de Gobernación y, ante su ausencia, las autoridades incurren en un exceso lo cual genera inseguridad jurídica para mi mandante, imponiendo cargas excesivas que se traducen en la participación a que refiere el artículo 5° de la LFJS. - - - En la especie tal carga excesiva puede apreciarse concretamente en la Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos que tuvo que realizar mi mandante el día 18 de octubre de 2001 en un monto de \$ 1,211.00 (un mil doscientos once pesos 00/100 moneda nacional), por cuanto hace a esta facultad conferida a la Secretaría de Gobernación, ya que dicho monto representa en términos aritméticos un porcentaje mayor al 30 por ciento del valor de los premios que se otorgaron en el sorteo realizado por mi mandante, en efecto el valor de los premios no alcanza la cantidad de \$ 5,000.00 M.N. (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por lo que este pago es excesivo. - - - En efecto, dicho pago fue realizado por mi mandante en cumplimiento a la orden recibida del C. José Alejandro Agis Lozada, Jefe de Departamento del Área de Sorteos de la Dirección de Juegos y Sorteos quien le indicó a dos de las personas autorizadas por mi mandante a recibir notificaciones, que si no se pagaba dicha cantidad no se podía expedir el permiso en



cuestión. - - - Al haber realizado ese pago por instrucciones del C. José Alejandro Agis Lozada se afectó su esfera jurídica violándose en consecuencia su garantía de seguridad jurídica puesto que se le aplicó a mi representada un numeral que no señala parámetros objetivos y claros de actuación, se desconoce por parte de mi mandante el por qué llegó a concluir la autoridad responsable (que en el caso en concreto es el Jefe de Departamento del Área de Sorteos), que el monto que debía pagar Radiopolis por concepto de participación era esa cantidad, pues bien pudo ser otra o simplemente \$ 1.00 M.N. (un peso 00/100 moneda nacional), con lo cual, la facultad tan amplia concedida provoca necesariamente una inseguridad jurídica en perjuicio de la hoy quejosa. - - - Aunado a lo anterior, mi mandante desconoce el por qué tuvo que pagar en esa fecha, es decir, el 18 de octubre de 2001, y no en otra, quedando a consideración y arbitrio de esa Secretaría la época de pago, facultad que ni por asomo se encuentra delimitada por parámetros claros en el artículo que se estima constitucional. - - - Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones, los siguientes criterios visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis XXXVII/2001, Página 503 y Tesis 1ª LVII/2001, Página 248, de la Primera Sala, aplicables

en cuanto: - - - "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO ESTABLECE QUE RESPECTO DE ALGUNAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES NO EXISTE PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1995)". (Se transcribe). - - - "VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN LOS AÑOS DE 1995 A 1997), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, SÓLO EN CUANTO A QUE NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES". (Se transcribe). - - - ***Asimismo son aplicables en este mismo sentido la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis P.CLV/2000, Página 25 y el criterio sustentado en el amparo en revisión: 884/2000, Quejoso: Distribuidora Intermex, S. A. de C. V.: - - - "FISCALIZACIÓN. LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 42-A (VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE***



MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA PLANEAR Y PROGRAMAR LOS ACTOS RELATIVOS, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL". (Se transcribe). - - - En la especie, independientemente de que estemos ante una obligación que se cobre a manera de contribución o de no contribución, es claro que la facultad conferida en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos no cumple con las garantías de seguridad jurídica ya que de ninguna manera se establecen parámetros claros y certeros aplicables al ejercicio de la misma. - - - Resulta pues que la ambigüedad con que se presenta la facultad otorgada a la Secretaría de Gobernación viola la garantía de seguridad jurídica de mi mandante, pues los excesos manifiestos en la aplicación concreta de los artículos 5° y 6° de la LFJS no se ajusta a los parámetros de los artículos 14 y 16 constitucionales. - - - Ahora bien, en el no concedido caso de que el anterior concepto de violación se considere por si mismo insuficiente para conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a mi mandante, a continuación se hacen valer los siguientes en contra de la denominada 'participación' prevista en los numerales de mérito. - - - SEGUNDO. Inconstitucionalidad de la Ley Federal de Juegos y

IS ME
C
L
E

Sorteos, concretamente en sus artículos 5° y 6° debido a que ocasionan en perjuicio de la quejosa una inseguridad jurídica violándose en consecuencia la garantía prevista en el artículo 16 constitucional, toda vez que la contribución, que en el caso en particular es un derecho, previsto en ese artículo no guarda una relación directa con el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal por cuanto hace a mi mandante de contribuir para los gastos públicos en que dispongan las leyes. - - - En este entendido y sólo para efectos del presente concepto de violación mi mandante considera que la participación que le corresponde al Gobierno Federal en términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, es un derecho. Es decir, mi representada considera que la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Gobierno, Dirección de Juegos y Sorteos está prestando un servicio y por esta razón, esa contraprestación que se establece se conceptualiza como un derecho. - - - Dichos preceptos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos infringen lo dispuesto por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal porque permite a la autoridad responsable denominado Secretario de Gobernación señalar un monto de participación sobre los productos obtenidos por el permisionario que se traduce en una contribución y en la especie se trata de un Derecho que no guarda relación alguna con la obligación de los



governados a contribuir con los gastos públicos. - -

- La facultad conferida al Secretario de Gobernación, sólo se justifica en función de la garantía constitucional que tiene mi mandante de contribuir para los gastos públicos y si dicha facultad de señalar el monto de la participación de los supuestos productos que obtuvo mi mandante, entonces resulta inconcuso que esa potestad no está encaminada a la obligación prevista por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. -

- - Se sostiene por mi mandante que la contraprestación a que se refiere la Ley, es realmente un Derecho puesto que con fundamento en el artículo 2° del Código Fiscal, mi mandante recibe el servicio público del Estado por realizar una función de derecho público. - - - En efecto, al expedir el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de Gobernación, dicha autoridad en ejercicio de sus prerrogativas públicas, realiza este acto administrativo reglado, lo cual hace consistir a la contraprestación recibida por ella, en un derecho jurídico. - - - Así, todo pago que se haga al Gobierno Federal por la obtención de un servicio que presta el Estado en ejercicio de sus funciones de derecho público, constituye un derecho, v.gr., en términos de la Ley Federal de Derechos, el pago de derechos por el almacenaje de mercancías en depósito ante la aduana; el derecho de trámite aduanero; el pago por concepto

de permiso para la explotación de vías de jurisdicción federal como es el caso de permisionarias del autotransporte federal de carga o pasajeros; el derecho por el uso de vías generales de comunicación; el derecho por la construcción de puentes en carreteras federales; entre muchos más ejemplos. - - - Es por esta situación que la naturaleza a que se refiere la participación de los artículos 5° y 6° de la LFJS, no puede ser otra que la de considerarlo como derecho, pues es claro que el Estado realiza una función pública al otorgar el permiso a mi mandante a cambio de una contraprestación en numerario por esta circunstancia. - - - Efectivamente, el derecho a que se refiere el artículo 5° de la LFJS, es inconstitucional debido a que de ninguna forma se puede considerar que se destina al gasto público; no es posible sostener la constitucionalidad de dicha contribución en cuanto se destina al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia, dependientes de la Secretaría de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, puesto que ese fin no es gasto público. - - - El gasto público se integra en términos del artículo 2° de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal por las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo de deuda pública, y por concepto de responsabilidad



patrimonial que realizan todos los órganos que integran la estructura estatal, ahora bien, en el caso en particular, el artículo 5° dispone un destino específico y concreto para la participación de este derecho, y por lo mismo no puede ser considerado como gasto público, toda vez que éste se debe integrar por todos los conceptos a que se refiere el artículo 2° de la mencionada ley que previamente han sido aprobados por el presupuesto de egresos, con lo que el destino al mejoramiento de establecimientos de Prevención Social y Asistencia de ninguna forma puede ser considerado que se destine al gasto público, ya que la ley que se tilda de inconstitucional, no puede señalar ni por asomo, un destino concreto y específico, puesto que entonces se viola lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. - - - Es así que mi mandante, al haber efectuado el pago por concepto de esa contribución que en la especie se traduce en un derecho, necesariamente debe contribuir al gasto público en general, y no para un fin concreto y específico como se encuentra establecido en los citados artículos 5° y 6° de la LFJS; si se pensare de forma contraria, entonces se rompería con el esquema financiero del Estado Mexicano, ya que entonces cada ley podría señalar partidas (expresión concreta de un gasto) del presupuesto de egresos; situación ilógica e incongruente. Es así entonces, que los artículos

LOS
C
E
D
DL

antes señalados, aplicados a mi mandante mediante el pago efectuado y el permiso concedido, son a todas luces inconstitucionales. - -

- Aunado a lo anterior, los multirreferidos artículos 5° y 6° resultan violatorios del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que el legislador federal, está delegando en la autoridad administrativa, que en el caso en concreto es el Secretario de Gobernación la potestad tributaria; esto es así ya que el Congreso General es el único órgano estatal que puede mediante ley, determinar la forma, el monto, época de pago y demás elementos de las contribuciones como el sujeto, objeto, base gravable, tasa o tarifa; es por esta situación que el artículo 31, fracción IV, señala como obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en los términos en que dispongan las leyes y en consecuencia son éstas las que así lo deben determinar y no, como acontece en el artículo 5°, la autoridad administrativa. Así, no puede quedar al arbitrio o discrecionalidad del órgano que debe ejecutar las leyes, fijar los elementos de las contribuciones. - - - Además de lo antes señalado es clara la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal por el denominado derecho ya que específicamente no se señala el monto correspondiente a las tarifas conforme a las cuales le corresponderá a los destinatarios de la norma contribuir, sino que de



forma por demás inconstitucional se señala que dicha participación le corresponderá fijarla a la Secretaría de Gobernación. - - - **TERCERO.-** Violación a las garantías de proporcionalidad y equidad establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de la República Mexicana. - - - Ahora bien, en el hipotético caso de que ese H. Juez de Distrito considere que no estamos ante la presencia de un derecho, mi mandante sostiene de forma cautelar que la participación contenida en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en realidad es un impuesto. - - - Así es, el artículo 31 constitucional, en su fracción IV establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. - - - **Textualmente establece: - - -**

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como el Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes".

ORTE DE
NACIONAL
I. SALA
ACUERDO

Atento a lo dispuesto por el precepto constitucional invocados, la facultad para imponer contribuciones

por parte del Estado no es absoluta, ya que se encuentra limitada por lo que el Pacto Federal establece respecto a los derechos de los mexicanos relacionados con su deber de contribuir al gasto público. - - - Esto es, si bien es cierto que se debe contribuir para el gasto público de los sujetos activos de la relación jurídica-tributaria que sea el precitado artículo constitucional, también lo es que debe hacer (contribuir) de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. - - - La propia Suprema Corte ha determinado que sin importar que el propio numeral 31 se ubique fuera del capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominado: "De las Garantías Individuales", el imperativo legal ahí contenido debe ser considerado como una garantía individual a favor de los gobernados por la importancia misma que conlleva el destinar una parte del patrimonio personal a los gastos públicos de la Federación, Estados, Distrito Federal o Municipios en que se resida, siendo por tanto evidente que los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad se erigen como garantías a favor de los gobernados, oponibles frente a la autoridad legislativa a efecto de que al imponer contribuciones ésta no violente tales derechos. - - - Confirma lo anterior, los siguientes criterios visibles en el Apéndice de 1995, Tomo I, Séptima Época, Pleno, Suprema Corte de

STPRED
SECRETARIA
DE GU
TAI



Justicia de la Nación, tesis 173, página 173 y tesis 275, página 256: "IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS. De acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales; primero, que sea establecido por ley; segundo, que sea proporcional y equitativo, y tercero, que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución General. Ahora bien, aun cuando respecto de los requisitos de proporcionalidad y equidad, este Tribunal Pleno no ha precisado una fórmula general para determinar cuándo un impuesto cumple dichos requisitos, que traducidos de manera breve quieren decir de justicia tributaria, en cambio, de algunas de las tesis que ha sustentado, pueden desprenderse ciertos criterios. Así se ha sostenido, que, si bien el artículo 31 de la Constitución, que establece los requisitos de proporcionalidad y equidad como derecho de todo contribuyente, no está en el capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de este derecho sí es una violación de garantías cuando los tributos que decreta el Poder Legislativo son notoriamente exorbitantes y ruinosos. También este Tribunal Pleno ha considerado que la equidad exige que se respete el principio de igualdad, determinando que es norma de equidad la de que se encuentren obligados a determinada situación los que



LA CORTE
DE LA
IDA
DE

se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente o sea, tratar a los iguales de manera igual. Es decir, este Tribunal Pleno ha estimado que se vulnera el derecho del contribuyente a que los tributos sean proporcionales y equitativos, cuando el gravamen es exorbitante y ruinoso y que la equidad exige que se respete el principio de igualdad”.

- - - “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe



ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula". - - - **Sobre los dos principios antes señalados, podemos decir que nuestra honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido de manera general y uniforme respecto a todas y cada una de las contribuciones existentes en el régimen jurídico tributario mexicano, cuándo se da cumplimiento a los requisitos de proporcionalidad y equidad; sin embargo, sí ha establecido diversos criterios para lograr tal determinación. - - - La Suprema Corte ha**

sostenido que la proporcionalidad radica, esencialmente, en que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos; este principio se vincula con la capacidad económica de los contribuyentes, que deben de gravarse diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que el impacto sea distinto en cada caso, siempre en relación con la capacidad contributiva. - - - En términos de los criterios anteriormente vertidos se ratifica que el referido precepto constitucional establece los principios de proporcionalidad y equidad de los tributos y que conforme a estos principios, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cuantitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. - - - También se indica en las referidas tesis, que el principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico, tanto en hipótesis de causación como en hipótesis de exención.- - - Por su parte, la doctrina mexicana que se ha emitido sobre el particular en materia de derecho fiscal ha señalado lo que se debe entender por



proporcionalidad y equidad. - - - Así, tenemos que el distinguido doctrinario Lic. Adolfo Arriola Vizcaino en su obra, Derecho Fiscal, de la casa Editorial Themis señala lo siguiente sobre los señalados principios: - - - 'PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD - - - ... La proporcionalidad es la correcta disposición entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ellas gravados. - - - ... Cabe afirmar que el principio de proporcionalidad significa que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de sus respectivas capacidades económicas, aportaciones a la Hacienda Pública una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, pero nunca una cantidad tal que su contribución represente prácticamente el total de los ingresos netos que hayan percibido, pues en este último caso se estaría utilizando a los tributos como un medio para que el Estado confisque los bienes de sus ciudadanos. - - - Dicho en otras palabras, el principio de proporcionalidad implica, por una parte, que los gravámenes se fijen en las leyes de acuerdo con su capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a las de medianos y reducidos recursos y por otra, que a cada contribuyente individualmente considerado, exclusivamente la ley lo obligue a aportar al fisco una parte razonable de sus percepciones

gravables. - - - Por eso sostiene que los únicos tributos que se ajusten a este principio son los que se determinan a base de tarifas progresivas, ya que dichas tarifas son precisamente las únicas que garantizan que a un ingreso superior corresponda, en términos cualitativos, una contribución mayor, tal y como lo explicamos detalladamente en el capítulo inmediato precedente. De ahí que en aquellos regímenes fiscales en los que se desea velar por la debida vigencia del principio que nos ocupa, se proscriben toda posible existencia de impuestos a tasas o cuotas fijas, las que como lo señalamos en su oportunidad, implican que quienes más ganan contribuyen cuantitativamente en volumen que los que menos ganan, pero sufriendo ambos tipos de contribuyentes idéntica afectación patrimonial. Cosa que desde luego no sucede cuando se establecen tarifas porcentuales progresivas, como es el caso, para citar un ejemplo de derecho comparado, del sistema fiscal italiano que se rige por un inteligente principio consignado en el artículo 53 de la respectiva Constitución Política, en los siguientes términos: "Todos son llamados a concurrir a los gastos públicos en razón de su capacidad contributiva. El sistema tributario se inspirará en criterios de progresividad". - - - En síntesis, el principio de proporcionalidad y equidad aparece estrechamente vinculados con la capacidad económica de los contribuyentes, la que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas



progresivas para que en cada caso el impacto patrimonial sea distinto no solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, la que debe corresponder a su vez a los ingresos obtenidos. - - - Los conceptos anteriores quedan plenamente corroborados por el criterio que - separando atinadamente lo relativo al principio de equidad- ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia, el cual, en su parte conducente, expresa textualmente lo que a continuación se transcribe: - - - 'Todos son llamados a contribuir a los gastos públicos en razón de su capacidad contributiva y el sistema tributario se inspirará en criterios de progresividad; estos criterios de progresividad son con justeza la proporcionalidad de que se trata la fracción IV del artículo 31 de la Constitución de México, si se tiene en cuenta que la proporción impositiva está en relación inmediata con la capacidad contributiva del obligado a satisfacer el tributo y las necesidades requeridas para solventar los gastos públicos de la Nación'. (Informe de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1969, jurisprudencia Sala Administrativa página 52). - - - Finalmente, no debemos perder de vista un tercer aspecto. El principio de proporcionalidad, tal y como atinadamente lo apuntara Adam Smith, debe considerarse en relación a la economía general de un país, de tal manera que las cargas tributarias se distribuyen, justa y

adecuadamente, entre las fuentes de riqueza disponibles y existentes. Es decir, no basta con que se grave a los ciudadanos en función de sus respectivas capacidades económicas, es además necesario que los gravámenes se repartan equilibradamente entre las diversas fuentes de riqueza, con el objeto de que no sean una o dos las que preferentemente sostengan al fisco. - - - Resumiendo, el principio de proporcionalidad se estructura dentro de nuestro derecho fiscal atendiendo a los siguientes elementos primordiales. - -

- a. La capacidad económica de los ciudadanos, a fin de que cada uno de ellos contribuya cualitativamente en función de dicha capacidad. - - -
- b. Una parte justa y adecuada de los ingresos, utilidades o rendimientos percibidos por cada causante como factor determinante para fijar la base gravable: - - -
- c. Las fuentes de riqueza disponibles y existentes en el país, entre las cuales deben ser distribuidas en forma equilibrada todas las cargas tributarias, con el objeto de que no sean sólo una o dos de ellas las que la soporten en su totalidad. - - -

PRINCIPIO DE EQUIDAD. - - - ...

Podemos arribar a la conclusión de que el común denominador del principio de equidad está constituido por la igualdad. Esto significa que para el debido acatamiento del principio, las leyes tributarias deben otorgar el mismo tratamiento a todos los sujetos pasivos que se encuentren colocados en idéntica situación, sin llevar a cabo discriminaciones indebidas y, por ende, contrarias a toda noción de justicia. - - -



Dentro de este contexto, el principio de equidad va a significar, como lo apuntamos líneas atrás, la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pagos, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. En esencia la equidad atiende a la igualdad en la regulación de todos los elementos integrantes del tributo o contribución, con excepción de las tasas, cuotas o tarifas. Es decir, la norma jurídico-tributaria no debe establecer distinciones concediendo, por ejemplo, mayores plazos de pago para unos contribuyentes que para otros, sancionando con diferente severidad el mismo tipo de infracción, etc., cuidándose tan solo en acatamiento del ya analizado principio de proporcionalidad, de que las tarifas, cuotas o tasas impositivas contengan diferencias porcentuales, a fin de que cada quien contribuya según el volumen de ingresos, utilidades o rendimientos gravables que perciba. - - - La proporcionalidad puede definirse como el principio en virtud del cual todas las leyes tributarias, por mandato constitucional, deben establecer cuotas, tasas o tarifas progresivas que graven a los contribuyentes en función de su verdadera capacidad económica; afectar fiscalmente una parte justa y razonable de los ingresos, utilidades o

rendimientos obtenidos por cada contribuyente individualmente considerado; y distribuir equilibradamente entre todas las fuentes de riqueza existente y disponibles en el país, el impacto global de la carga tributaria, a fin de que la misma no sea soportada por una o varias fuentes en particular. - - - Por su parte, a la equidad podemos definirla como el principio en virtud del cual, por mandato constitucional, las leyes tributarias deben otorgar un tratamiento igualitario a todos los contribuyentes de un mismo tributo en todos los aspectos de la relación jurídico-fiscal (hipótesis de causación, objeto gravable, fechas de pago, gastos deducibles, sanciones, etc.), con excepción del relativo a las tasas, cuotas o tarifas que deberá encontrarse inspirado en criterios de progresividad. Dicho en otras palabras, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. - - - Las ideas anteriores fueron generosamente recogidas en la sentencia dictada con fecha 12 de junio de 1984 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, con base en una brillante ponencia de su distinguido Ministro el señor licenciado Mariano Azuela Güitrón, en el amparo en revisión 554/83 (Compañía Cerillera "La Central", S.A.) cuya parte medular es del tenor siguiente: "RENTA. SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I Y 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA



MATERIA (VIGENTES RESPECTIVAMENTE EN LOS AÑOS DE 1979, 1980 Y 1981).- De acuerdo con lo establecido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución los impuestos deben ser proporcionales y equitativos. La proporcionalidad consiste en esencia, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad económica debiendo fijarse los gravámenes de tal manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los medianos y reducidos recursos, lo que se logra a través de las tarifas progresivas. La equidad significa, totalmente, la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravados, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo variar únicamente las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente para respetar el principio de proporcionalidad. Ahora bien los preceptos específicos no cumplen con los anteriores requisitos, pues, por una parte al permitir en un caso la deducción de un gasto y prohibirlo en otros, a pesar de ser la misma naturaleza, propicia que contribuyentes que se encuentren en la misma situación jurídica frente a la ley sean colocados en situación desigual, pues mientras los que pueden hacer la deducción verán disminuir su ingreso gravable, los que no pueden hacerla lo verán

incrementado, atentándose contra la equidad en los tributos. Por otra parte, se falta a la proporcionalidad porque el que se tengan trabajadores con salario mínimo o con salario mayor al mínimo no es determinante de la capacidad económica del contribuyente y por lo mismo al propiciarse que se aplique una tarifa mayor a quien no puede, hacer la deducción frente al que pueda realizarla, a quien se facilitará que se le aplique una menor, se vulnera el principio de proporcionalidad pues el pago del tributo no se encontrará, en lo que toca a este punto en proporción a la capacidad económica sino que dependerá de una situación extraña a ella". - - -

Partiendo de las anteriores definiciones, estimamos que es factible señalar las siguientes diferencias entre estas dos importantes y debatidas máximas constitucionales: - - - 1. Mientras el principio de proporcionalidad atiende a la capacidad económica de los contribuyentes y a la correcta distribución de las cargas fiscales entre las fuentes de riqueza existentes en una nación, el de equidad se refiere específicamente al problema de la igualdad de los causantes ante la ley. - - - 2. El principio de proporcionalidad está vinculado con la economía general del país, en cambio el de equidad se relaciona con la posición concreta del contribuyente frente a la ley fiscal. - - - 3. La proporcionalidad atiende fundamentalmente a las tasas, cuotas o tarifas tributarias; en tanto que el principio de equidad se



ocupa de los demás elementos del tributo, con exclusión precisamente de las cuotas, tasas o tarifas. - - 4. El principio de proporcionalidad debe inspirarse en criterio de progresividad, el de equidad se basa siempre en una noción de igualdad. - - - 5. La proporcionalidad persigue la implantación de la justicia en todo el sistema tributario nacional; en cambio, la equidad es, por excelencia, la aplicación de la justicia a casos concretos. - - - 6. La proporcionalidad busca la desigualdad, a fin de afectar económicamente en mayor medida a las personas de mayores ingresos que a las de mediano y reducidos recursos; por su parte, el principio de equidad implica tratar igual a los iguales y en forma desigual a los colocados en situación de desigualdad. - - - 7. La proporcionalidad existe en función de la percepción de ingresos, utilidades o rendimientos y en función de la existencia de fuentes de riqueza gravables; por el contrario, el principio de equidad exclusivamente trata de que encuentren obligados a determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y de que no se encuentren en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente. - - - 8. El principio de proporcionalidad regula la capacidad contributiva de los ciudadanos el de equidad atiende preferentemente a las hipótesis normativas de nacimiento y plazo para el pago de las contribuciones. - - - 9. Mientras que el principio de proporcionalidad se vincula directamente con el entero de las contribuciones necesarias para

sufragar los gastos públicos, el de equidad se relaciona con la regulación justa y adecuada del procedimiento recaudatorio en sí. - - - 10. Finalmente, cabe señalar que mientras que el principio de proporcionalidad opera en atención a la capacidad contributiva de cada contribuyente, lo que motiva que los que tienen mayores bienes económicos paguen mayores tributos; el de equidad sólo opera con respecto a las personas que al ser sujetos pasivos de un mismo tributo, deben tener igual situación frente a la ley que lo establece, en todas las facetas de su regulación, con excepción de las relativas a sus respectivas capacidades económicas. - - - **Ahora bien, en el caso específico el Secretario de Gobernación al señalar la participación de los productos (los cuales no obtuvo mi mandante), violatorios en perjuicio de mi mandante los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV del Pacto Federal. - - - En efecto, los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos antes transcritos fueron aplicados directa y concretamente a la quejosa a través de la Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos, el pasado día 18 de octubre del 2001, así como en términos del permiso No. S-1078-2001 otorgado por la Secretaría de Gobernación. - - - El gravamen establecido en términos de los preceptos anteriores, es inconstitucional por las siguientes razones, que para efectos de un estudio**





adecuado se dividen en dos apartados. - - -

Violación al principio de Proporcionalidad. - - - A) la

falta de proporcionalidad del derecho, es decir de la

participación señalada por la Secretaría de

Gobernación, radica en que no atiende a la

capacidad contributiva de las personas que

organicen los juegos y sorteos, sino que

indiscriminadamente impone, en todos los casos,

sin importar si se obtienen o no por el

permisionario productos o provechos, una

participación con la tasa que Arbitraria e

indiscriminadamente determine la Secretaría de

Gobernación. - - - Luego ~~entonces~~, no existe

proporción en el gravamen en relación a los

haber de los obligados a satisfacerlo (sujetos

pasivos de la relación jurídica tributaria). - - - La

jurisprudencia de la Corte así como la doctrina que

se ha emitido sobre el particular, han señalado que

para cumplir de manera adecuada con el principio

de proporcionalidad es pertinente establecer tasas

progresivas a efecto de atender debidamente a la

capacidad económica de cada sujeto pasivo, de

manera que las personas que obtengan ingresos

elevados tributen en forma cualitativamente

superior a las de medianos y reducidos recursos,

de tal forma que cada contribuyente

individualmente considerado, esté obligado

exclusivamente a aportar al fisco una parte

razonable de sus percepciones gravables. - - - Así,



CORTE DE
LA NACION,
A SALA
DE ACUSACIONES.

los únicos tributos que se ajustan a este principio son los que se determinan con base en tarifas progresivas, ya que dichas tarifas son precisamente las únicas que garantizan a que a un ingreso superior corresponda, en términos cualitativos, una contribución mayor. - - - Esto es, en lugar de gravar con una tarifa proporcional y progresiva que es la que permite que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos, a fin de que muestre su real capacidad contributiva, el impuesto en comento ni siquiera establece una tasa, puesto que deja al arbitrio y discrecionalidad del Secretario de Gobernación determinarla, lo cual, conculca el principio de proporcionalidad. - - - Estos criterios han sido expresados consistentemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según puede verse en la tesis de jurisprudencia transcrita en el Informe 20 de la Corte correspondiente al año de 1969, página 45, la cual transcribimos a continuación: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. NATURALEZA. El impuesto requiere ser proporcional y esa proporción, para ser justa, se fundará, en primer término, en el ingreso del contribuyente, punto de partida para aquilatar su capacidad contributiva y poder significarse que si aquél



obtiene mayores ingresos, más alto tendrá que ser el impuesto que llegará a satisfacerse, correspondiendo al legislador y a su obra inmediata, esto es, la ley, fijar esa proporción. Es de trascendencia conocer, para poder apreciar cuándo un impuesto es proporcional, cuáles son los antecedentes de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República. La Asamblea Constituyente de Francia, en su nombrada declaración del año de 1789, consideró que "para el mantenimiento de la fuerza pública y para todos los gastos de la administración, es indispensable una contribución igualmente distribuida entre todos los ciudadanos en atención a sus facultades (artículo 13). Esta teoría constitucional acerca del impuesto está apoyada en el principio de que todos deben contribuir a los gastos públicos, pero, al mismo tiempo, en el supuesto de que la aportación es "en atención a sus facultades" es decir, a lo que modernamente la doctrina tributaria registra como la capacidad contributiva del deudor de la carga fiscal. Se desconoció, así, por vez primera, en un texto constitucional, que el impuesto sea un "sacrificio", tal como sostuvo la teoría económica del siglo XVII y de gran parte del siglo XVIII. La Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812, recio y directo antecedente, en unión de la Constitución de los Estados Unidos de América del 17 de septiembre de 1787. De las diversas Constituciones que se ha (sic) dado México, a partir del año de 1814, estableció, en el artículo 80, que "todo español está obligado sin



CORTE DE LA NACION A SALA DE ACUERDOS

distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado, y en sus artículos 339 y 340 estatuyó que las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades y serán proporcionadas a los gastos que se decreten por las Cortes para el servicio público en todos los ramos. Estas ideas de la Constitución de Cádiz, que en parte están tomadas del artículo 13 de la declaración de Francia, son el antecedente más directo del artículo 31 de las Constituciones de México de 1857 y de 1917, y su sistematización, en una doctrina del impuesto lleva a estas conclusiones: 1) Todos los habitantes de un Estado están obligados a pagar impuestos. 2) Los impuestos deben ser en proporción a los haberes del obligado a satisfacerlo, o a sus facultades y; 3) Las contribuciones serán proporcionadas a los gastos públicos del Estado, y si éstos son mayores, mayores tendrán que ser también esas contribuciones. La antes mencionada Constitución de Apatzingán regula (artículos 36 y 41) todo lo relativo a la situación constitucional del impuesto en México, cuando decreta que "las contribuciones públicas no son extorsiones de la sociedad", por lo que "es obligación del ciudadano contribuir prontamente a los gastos públicos". Es evidente, esta postura constitucional abandona la vieja teoría de que el impuesto sea un "sacrificio" que deben satisfacer todos por igual. La primera de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 arguye en su artículo 3o., fracción II, que "es obligación



del mexicano cooperar a los gastos del Estado con las contribuciones que establezcan las leyes y le comprendan", principio constitucional que ha de repetirse en el artículo 14 de las Bases de la Organización Política de la República Mexicana, del 12 de junio de 1843, y en el artículo 4° del Estatuto Orgánico Provisional expedido por don Ignacio Comonfort, el 15 de mayo de 1856. Desde hace más de siglo y medio, concretamente, a partir de la aplicación de la Constitución de Cádiz y de la Constitución Mexicana de 1857, es presupuesto constitucional del derecho tributario en México que el impuesto reúna los requisitos de proporcionalidad y equidad. El proyecto de la Constitución de la comisión integrada por Ponciano Arriaga, Mariano Yáñez y León Guzmán, sometió a la consideración del Congreso Constituyente de 1856-1857, estableció en su artículo 36 que "Es obligación de todo mexicano: defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos y justos intereses de su patria y contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipios en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". El 26 de agosto de 1856 se aprobó por unanimidad de 79 votos y con la única modificación surgida por el diputado Constituyente Espiridión Moreno, a fin de sustituir la expresión "justos intereses de la patria" por la de "intereses de la patria". El artículo 36 del proyecto de Constitución, que la comisión de estilo dispuso en dos

fracciones y quedó, definitivamente, como artículo 31 de la Constitución de 1857. Este mismo artículo 31 fue reformado, años después mediante decreto del 10 de junio de 1898, y al adicionársele con una fracción más, pasó a ser su antigua fracción II la tercera, para resultar concebido como sigue: "Artículo 31. Es obligación de todo mexicano: I. Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria. II. Prestar sus Servicios en el Ejército o Guardia nacional, conforme a las leyes orgánicas respectivas. III. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". El proyecto de Constitución presentado por don Venustiano Carranza, al Congreso Constituyente de 1916-1917, conservó en sus propios términos la fracción III del artículo 31 de la Constitución de 1857, al incluirla como la fracción IV del mismo artículo 31 y discurrir que es obligación del mexicano contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La comisión integrada por los diputados Constituyentes Francisco J. Mújica, Alberto Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga, no introdujo ninguna modificación a las fracciones III y IV del artículo 31 del proyecto, aunque sí a las dos primeras, y el Congreso Constituyente aprobó en su sesión del 19 de enero de 1917, por 139 votos esa



cláusula constitucional que se ciñó en todo, incluso en su expresión literal, a lo dispuesto por el antiguo artículo 31 de la Constitución de 1857, y cuya trayectoria respeta el principio de que la justicia impositiva en México esta fundamentada en la proporcionalidad y equidad del impuesto. Esta proporcionalidad exigida para el impuesto por la fracción IV del vigente artículo 31 de la Constitución de 1917, está concorde con sus antecedentes constitucionales ya examinados y con la doctrina económico-política en que se inspiró la declaración francesa de 1789 (artículo 13) y la Constitución de Cádiz de 1812 (artículos 8o, 339 y 340), y su verdadero sentido está directamente vinculado a la capacidad contributiva del deudor fiscal y los tributos requeridos para cubrir los gastos públicos de la Federación Mexicana, pues el impuesto debe ser "en atención a sus facultades" (posibilidades), como propuso dicha declaración, o "en proporción a los gastos decretados y a los haberes o facultades" del obligado, como quiso e instituyó la misma Constitución de Cádiz. Estos principios constitucionales del impuesto en Francia y en México han tenido tal proyección para la teoría de la Constitución, que Italia los procura en su vigente Ley Fundamental del 31 de diciembre de 1947, cuando en su artículo 53 afirma que "todos son llamados a concurrir a los gastos públicos, en razón de su capacidad contributiva y el sistema tributario se inspira en criterios de progresividad". Estos "criterios de

progresividad" son con justeza la proporcionalidad de que trata la fracción IV del artículo 31 de la Constitución de México, si se tiene en cuenta que la proporción impositiva es en relación inmediata con la capacidad contributiva del obligado a satisfacer el tributo y a las necesidades requeridas para solventar los gastos públicos de la nación, de modo que si mayor es la capacidad contributiva, mayor será también la cuota a cubrir, que en su progresividad encuentra su justa realización tributaria y su adecuada proporción". Séptima Época, Sala Auxiliar, Informes, Tomo Informe 1969, Parte II, página 45. - - - **Asimismo y en apoyo de lo anterior, se transcribe la siguiente jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, visible en el Apéndice de 1995, Tomo I, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 170, página 171, que es del tenor siguiente:** "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las



personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los

contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula". - - - De ahí que en el caso específico al establecer una facultad sin los parámetros que pudiera determinar la tasa aplicable para todos aquellos que organicen juegos o sorteos como es el caso de mi mandante, esos artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, no cumple con el principio de proporcionalidad en virtud de que no señala la tasa aplicable que permita atender específicamente al caso particular de cada contribuyente, ni mucho menos a su verdadera capacidad contributiva. - - -

B) Además al gravar a los sujetos del mismo con una tasa que no se encuentra determinada, que en el caso de distribución gratuita de los boletos o cupones, como sucede con mi representada -ya que únicamente se necesita que el radioescucha hable dentro del período para que registren sus datos personales para poder participar en el sorteo, sin que tenga que adquirir un boleto que le dé derecho a participar en el evento se aplica sobre los productos supuestamente obtenidos por mi mandante, siendo que en el presente caso no se obtuvo beneficio alguno, dicho tributo resulta gravoso, y confiscatorio, pues por una simple actividad que por sí sola no genera ingreso alguno para mi representada y sí gastos inherentes al evento y los demás impuestos correspondientes,



se inhibe y castiga la realización de este tipo de eventos, por más que como en el caso de mi mandante resulten de organización esporádica y gratuita. - - - Esto es, para un correcto reflejo de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria es pertinente que el tributo respectivo reconozca en su caso, todos aquellos gastos y/o erogaciones en que hubiera incurrido el contribuyente a efecto de obtener el monto sujeto a imposición. - - - Así entonces, toda disposición que implique que los contribuyentes de cierto impuesto paguen el gravamen sobre cantidades que no permiten el reflejo de tales gastos o erogaciones, evidentemente estarán desconociendo de los gastos, erogaciones y costos en que requiere incurrir el contribuyente para la obtención del monto específico que constituye la base gravable del tributo, como en la especie lo pueden ser los gastos de organización de un concurso, o los gastos de adquisición del premio, etc., se traducirá en una violación al principio de proporcionalidad tributaria, pues implicará que el sujeto pasivo quede obligado al pago del gravamen sobre una cantidad distinta a aquella que efectivamente represente su auténtica capacidad contributiva. - - - En la especie, el señalado tributo grava de manera automática a aquellos contribuyentes que como mi mandante organizan sorteos de forma gratuita, con una tasa

indeterminada aplicable directamente a los productos obtenidos sin que se le permita restar a dichos productos (base gravable) aquellos gastos o erogaciones en que hubiera incurrido para adquirirlo o bien, en que se hubiera incurrido por la celebración y organización del señalado sorteo. - - -

Al no permitir esta posibilidad, es claro que el impuesto en comento es inconstitucional ya que no atiende de manera adecuada a la verdadera capacidad contributiva de los causantes, toda vez que los productos obtenidos, que es la base gravable del señalado impuesto, no puede verse disminuida con los gastos o erogaciones inherentes a su organización, en los que por obvias razones tuvo que haber incurrido el organizador. - -

- Así, al no reconocer los gastos y erogaciones efectuados por el contribuyente, es claro que no se atiende a la capacidad contributiva del particular, ya que no permite repercutir en la base gravable del impuesto, de manera específica, aquellas erogaciones necesarias y esenciales para obtener el propio premio, que en términos de la legislación aplicable resulta ser la medida de la riqueza que indebidamente estableció el legislador federal. - - -

No podemos desprender una presunta capacidad contributiva, de los supuestos ingresos que obtendría de manera indirecta como organizador del sorteo, ya que como en el caso particular de la quejosa, el sorteo organizado no tiene ningún tipo



de afán lucrativo, es decir, no se venderá ningún bien o servicio con base o a partir del señalado sorteo. - - - Si en el caso particular mi mandante no obtiene ingreso alguno por la realización misma del sorteo, ya que en relación con éste únicamente tendrá los gastos relativos al mismo (importe de los premios, impuestos que se originen por la celebración del sorteo, etcétera) luego entonces, la simple celebración del sorteo, que es el objeto de esta participación de acuerdo a lo previsto por los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, no constituye una fuente de riqueza susceptible de ser gravada y por ende, no refleja capacidad contributiva de mi representada, con lo cual, se reitera, el impuesto en cuestión resulta desproporcionado y por tal motivo inconstitucional, violándose con ello en perjuicio de mi poderdante el invocado artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución Política. - - - Basta lo anterior para concluir que el impuesto o participación sobre los productos obtenidos es inconstitucional y por lo tanto también la Ley Federal de Juegos y Sorteos que lo crea, resultando todo lo anterior en violación en perjuicio de mi representada de las garantías consignadas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política que obligan a que las contribuciones sean proporcionales y equitativas y según lo antes dicho, implica un perjuicio para mi representada, pues resulta gravada por un

gravamen que se tilda de inconstitucional. - - - Violación al Principio de Equidad. - - - A) Los artículos que se controvierten son inconstitucionales porque establecen un impuesto inequitativo ya que no obstante que la hipótesis de causación es la misma -organización de concursos- grava de forma distinta a diversas personas que fungen como organizadores, para lo cual sólo toma como punto de partida para esta distinción si se obtienen o no productos por el permisionario del sorteo. - - - Dicho en otras palabras, aun y cuando la organización es el hecho imponible, la gravación específica es diferente para quienes obtengan o no productos como es el caso de mi mandante, toda vez que se le impuso dicho gravamen sin considerar que evidentemente no obtuvo ningún beneficio para ser considerado como producto. - - - A mayor abundamiento, el gravamen que se impone en el presente caso a mi representada, por la celebración de un sorteo con el cual no obtiene ningún ingreso, (ya que como ha quedado dicho, el número que se le asigna al radioescucha es el que le da derecho a la participación en el evento y es en forma gratuita y mi mandante es la que asume todos los gastos inherentes al evento, incluidos desde luego la entrega de premios y también los demás impuestos que se originen por la celebración del mismo), se equipara a aquellos sorteos por los cuales sí se



obtienen productos, con lo cual resulta nuevamente inequitativo el impuesto en comento y por consiguiente, inconstitucional. - - - Las personas que realizan juegos y sorteos y no obtienen productos, realizan exactamente la misma actividad gravada que aquellas personas que organizan el evento y sí los obtienen, esto es, ambos son organizadores; sin embargo, a los dos se les grava de forma distinta. - - - Más aún, las personas que como mi mandante no cobra por la participación evidentemente no pueden tener una utilidad o producto por la realización misma del evento, ya que en relación con este únicamente tendrán los gastos relativos al mismo (importe de los premios, impuestos que se originen por la celebración del concurso, etcétera) y ningún ingreso por este concepto, caso distinto de los sujetos que sí obtienen productos en los sorteos o concursos, en donde el espíritu de lucro queda de manifiesto por este simple hecho y la ley consigna con una tasa indeterminable, lo cual representa obviamente un ingreso para el organizador; dicho impuesto resultará como un gasto que obviamente se adicionará al costo de los bienes que se entreguen en premios. - - - De la comparación anterior, resulta la inconstitucionalidad del precepto indicado, porque desconoce las situaciones reales de aquellos eventos en los que obtienen productos y se impone una tasa

indeterminada, la cual también se aplica para aquellos que sí obtienen productos por la realización de juegos y sorteos y en los que evidentemente sí se tiene un ánimo de lucro e incluso la forma de llevarlos a cabo, desde el punto de vista económico es totalmente distinta a la de aquellos en los que como mi representada no obtiene cantidad alguna que represente el derecho de participar en los mismos, todo lo cual viola nuevamente en perjuicio de mi poderdante el principio de equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna y siendo causa más que suficiente para que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, declarando la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en su parte relativa al artículo 5°. - - - Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Informe de 1970, página 299, que a continuación se transcribe: "RENTA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. Es inconstitucional el precepto citado de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece que si en cualquier operación de las que se deriven o puedan derivarse ingresos comprendidos en las fracciones I, VI y VII del artículo 125 no se pacta interés o se estipula que temporal o permanentemente, total o parcialmente no se cause o se conviene que se cause una tasa



inferior al 6%, se estimarán como intereses los que resulten de aplicar al capital la tasa del 6%. Se declara inconstitucional este precepto porque desconoce las situaciones reales en que no se pactan intereses y arbitrariamente fija la suma de 6% anual bajo la presunción de que todo ingreso debe causar interés, gravando a sujetos que no lo perciben, en forma igual a aquéllos que sí los obtienen al haberlos estipulado en sus respectivos contratos, con violación del principio de equidad que consagra el artículo 31 en su fracción IV".

- - - **Entonces si el impuesto se limita a establecer una tasa indeterminada para todos los casos, sin considerar el patrimonio y los haberes de cada persona, por lo que es evidente que grava igual a todas las personas sin considerar las diferencias que entre ellas puedan existir en cuanto a su capacidad contributiva, esto es, grava igual a todas las personas sin analizar las propias desigualdades naturales y necesarias, incluso sin considerar en lo absoluto la clara distinción o diferencia que existe entre aquellos que cobran por evento, juego, o sorteo y aquellos que no cobran cantidad alguna por la celebración de los mismos, como es el caso, este último, de mi representada respecto al sorteo de que se trata, es claro que violenta en perjuicio de mi mandante el principio de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. - - - B) Señalamos con anterioridad que el principio de equidad obliga al legislador a**



COPIA DE
LA. 1084
A. C. L. A.
AL. OS.

establecer la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, hipótesis de exención, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. - - - En el caso particular es violado tal principio en razón de que el artículo 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, exenta a diversos sujetos del pago de dicho impuesto, sin importar que no exista razón suficiente para proceder de tal manera. - - - En efecto, el texto del señalado artículo establece:

"Artículo 6.- Lo dispuesto en el artículo 5° se aplicará también en relación con los permisos que se concedan para efectuar sorteos, con excepción de los siguientes:

- I. Los que realicen las autoridades, instituciones educativas y de beneficencia para dedicar íntegramente sus productos a fines de interés general;*
- II. Los que se celebren con fines exclusivos de propaganda comercial; y*
- III. Los que se verifiquen como sistema de ventas y en los que los participantes reciban íntegramente el valor de sus aportaciones en mercancías, efectos u otros bienes".*

Como puede verse, no existe un motivo cierto y adecuado de carácter objetivo que permita



establecer una distinción entre los sujetos exentos antes precisados y los sujetos que, como mi mandante, organizan sorteos por los que no obtienen ingreso o producto alguno. - - - Si en el caso particular el hecho imponible lo constituye la organización de sorteos y juegos por los que se obtengan productos, aun cuando por dichos eventos no se cobre cantidad alguna que represente el derecho de participar en los mismos, no existe razón suficiente para exentar del pago de este impuesto a las autoridades, Instituciones educativas y de beneficencia; a los que celebren con fines exclusivos de propaganda comercial o los que se verifiquen como sistema de ventas, etc., si ellos mismos se pueden ubicar en la hipótesis de causación antes señalada. - - - A manera de ejemplo, tomemos en consideración un sorteo que, como en el caso de mi mandante, no representa ingreso alguno para ella y no obtiene producto alguno, y uno que sea organizado por una autoridad, respecto del cual sí se cobre por el boleto y genere un ingreso para tales sujetos. - - - Según está redactado el artículo 6°, el primer evento, en el que no se obtiene lucro alguno porque no se cobra por los boletos, sí se encuentra gravado al haber sido organizado por un sujeto no exento, y el segundo en el que sí existe un ingreso, no se encuentra gravado, lo cual evidencia la violación al principio de equidad ya que no

SE A B A
ACUERDOS

obstante que ambos sujetos se ubican en la hipótesis de causación se les da un trato distinto, sin existir razón objetiva alguna para proceder de esta manera. - - - Confirma nuestro criterio la siguiente tesis de jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de 1996, Parte II, tesis P./J. 10/96, página 255:

"ACTIVO, IMPUESTO AL. LA EXENCIÓN A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 6o., fracción I de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en su origen (actual fracción II) al establecer que exenta del pago del tributo a las empresas que componen el sistema financiero, transgrede el principio de equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV constitucional, en virtud de que teniendo estas empresas activos destinados a actividades empresariales, y no presentarse respecto de ellas ninguna situación de beneficio o justificación social que pudiera fundar un trato privilegiado de exención, no existe razón alguna por la que respecto de ellas no se establezca que al ser sujetos del tributo deban pagar el impuesto al activo, el cual podrán acreditar al impuesto sobre la renta efectivamente pagado, sin que pueda argüirse como justificación de tal exención la dificultad para medir con exactitud el activo neto afecto a sus actividades empresariales por el hecho de operar con ahorro captado del público y con depósitos efectuados por el



mismo, como se señala en la exposición de motivos de la Ley, pues tal circunstancia, en todo caso, podría dar lugar a prever una forma especial de determinación de la base del tributo, pero de ningún modo justifica su exención, máxime que tales empresas son contribuyentes del impuesto sobre la renta, de manera tal que si pueden determinar sus utilidades para efectos de este impuesto, no existe razón alguna para presumir que en el impuesto al activo, esencialmente vinculado a aquél, no puedan hacer la determinación relativa. Tampoco puede admitirse como justificación de la exención que estén sujetas a un estricto control financiero, pues además de que ~~esto~~ no puede llevar a considerar innecesario el control que como "objetivo fiscal no contributivo", persigue el impuesto al activo, bajo este contexto se podría afirmar que todos los contribuyentes no sólo están sujetos a control fiscal y a diversos tipos de control administrativo, de acuerdo con la naturaleza específica de cada empresa, sino que el legislador siempre está en posibilidad de establecer nuevos sistemas de control dentro del marco constitucional, por lo que ello no puede considerarse una situación que diferencie esencialmente, para efectos fiscales contributivos, a las empresas que integran el sector financiero, de los demás sujetos pasivos del impuesto, lo que obliga concluir que la exención de mérito introduce dentro del sistema del tributo un trato desigual a iguales, lo que resulta violatorio del artículo 31, fracción IV de la Constitución,

en cuanto previene como un requisito esencial de las contribuciones que sean equitativas". Sin embargo, en el caso no se hace así ya que simple y llanamente, se exenta a cualquier autoridad, institución educativa o de beneficencia, sin que se exprese detallada y textualmente, en el cuerpo del numeral respectivo, el motivo o causa que tomó en consideración el Congreso de la Unión, para hacer la distinción que se controvierte. - - - Así, si no hay un criterio objetivo es claro que se viola en perjuicio de mi mandante el principio de equidad contenido en el artículo 31, fracción IV, del Pacto Federal. - - - Todo lo anterior es suficiente para tener por demostrada la violación a los principios constitucionales antes descritos. - - - Por las razones antes expuestas es claro que en el presente caso se configura en perjuicio de mi mandante una violación al imperativo legal contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, a efecto de que se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos y autoridades señalados a lo largo de la presente demanda. - - - CUARTO.- Todos los efectos y consecuencias del acto reclamado de esta demanda, adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad de los cuales se encuentra afectado aquel acto de la autoridad que fue su fuente u origen, por ser precisamente un resultado de aquél, motivo por el cual también en contra de



los actos que son efectos o consecuencias habrá de concederse a la sociedad quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal”.

CUARTO. Por auto de catorce de noviembre de dos mil uno el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa con residencia en el Distrito Federal, a quien correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda de garantías, ordenó su registro con el número 1018/2001 y, seguido el procedimiento respectivo, una vez celebrada la audiencia constitucional, dictó sentencia el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, la que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- SE SOBRESEE en el juicio el amparo solicitado por GRUPO RADIOPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo que hace a los actos y respecto de autoridades responsables Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Director del Diario Oficial de la Federación, Presidente de la República, Presidente del Servicio de Administración Tributaria, y Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, por los motivos que se exponen en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia.- - - SEGUNDO.- La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a GRUPO RADIOPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo que hace a los actos reclamados

a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Área de Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y por los motivos y efectos que se establecen en el considerando quinto de esta sentencia”.

Las consideraciones que sirven de sustento a los resolutivos antes transcritos son del siguiente tenor:

“SEGUNDO.- La autoridad responsable dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Presidente del Servicio de Administración Tributaria (firmando en su ausencia el Administrador Central de lo Contencioso), en su oficio por el que rinde su informe justificado el cual obra glosado a foja 143 a 144 de autos, manifiesta que no son ciertos los actos que de ella reclama la parte quejosa, consistente en la recepción de Declaración General de Pagos y Productos y Aprovechamientos que presentó el día dieciocho de octubre de dos mil uno, y la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; y, toda vez, que no aportó prueba alguna tendiente a desvirtuar la negativa de actos que expone la autoridad responsable, lo procedente a juicio del suscrito, es sobreseer en el juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.--- A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia



número trescientos diez, visible en la página doscientos nueve, Tomo VI, Materia Común, compilación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que a la letra dice:--- 'INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. (se transcribe).--- No es obstáculo, para arribar a la anterior consideración, el hecho que en autos la parte quejosa, haya ofrecido como prueba de su parte, copia certificada de la Declaración General de Pagos de Productos y Aprovechamientos, por la cantidad de \$1,211.00 (MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); sin embargo, de su contenido no se advierte que la autoridad responsable haya recepcionado la Declaración General de Pagos, como lo hace valer el quejoso.--- TERCERO.- Ahora bien, las autoridades responsables: Congreso de la Unión, Secretario de Hacienda y Crédito Público (firmando en su ausencia el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos), Secretario de Gobernación firmando por sí y en representación del Presidente de la República (rindiendo en ausencia del primero el Director General de Asuntos Jurídicos), Secretario de Salud (firmando en su ausencia el Director General de Asuntos Jurídicos), y Director del Diario Oficial de la Federación, en sus oficios por los que respectivamente rinden sus informes justificados, los cuales obran glosados a fojas 86, 87, 137 a 139,

y 145 a 146, 202 a 209, y 410 a 426 de autos, manifiestan que son ciertos los actos que de ellas reclama la parte quejosa, los cuales hace consistir en la discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación del decreto promulgatorio de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.--- Actos estos que por ser parte del derecho positivo vigente, no ameritan ser objeto de prueba, criterio que por identidad de razón sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página novecientos ochenta y tres, primera parte, de la sección segunda, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de mil novecientos noventa y siete a mil novecientos noventa y ocho, que es del tenor literal siguiente:--- 'LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA. (se transcribe).--- Por otra parte, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su oficio por el que rinde su informe justificado, el cual obra glosado a fojas 410 a 426 de autos, no se pronuncia respecto de los actos que la parte quejosa reclama, consistentes en la recepción de Declaración General de Pagos y Productos y Aprovechamientos que presentó el día dieciocho de octubre de dos mil uno, y la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, motivo por el cual de conformidad con el



párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados, pero no así, la totalidad de los hechos expuestos en la demanda de garantías.--- Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VI.1o.214 K, página 364 (trescientos sesenta y cuatro), Tomo: XV-II, Febrero de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación:--- 'INFORME JUSTIFICADO. CUANDO SON VARIOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE REFIERE A TODOS, DEBEN TENERSE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS AQUELLOS RESPECTO DE LOS QUE NADA DIJO. (se transcribe).'- Del mismo modo, es sustentable la jurisprudencia número 2a./J. 7/94, visible en la página diecisiete, Tomo: 79, Julio de 1994, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:--- 'INFORME JUSTIFICADO SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. (se transcribe).'- El Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de garantías, en su oficio por el que rinde su informe justificado, el cual obra glosado a fojas 385 a 390 de autos, manifiesta que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en

la expedición del permiso número S-1078-2001 de fecha veintidós de octubre de dos mil uno.--- Por último, el Jefe de Departamento de Permisos de Sorteos dependiente de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en su oficio por el que rinde su informe justificado, el cual obra glosado a fojas 383 y 384 de autos, manifiesta que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la orden verbal para que de conformidad con los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Sorteos y Juegos, efectuara el pago de \$1,211.00 (MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de participación por los 'supuestos' productos obtenidos y que correspondían al Gobierno Federal.--- Es importante destacar que su negativa se encuentra desvirtuada, con las siguientes pruebas:--- a) Con la documental pública que en copia certificada obra a foja 75 de autos, consistente en la Declaración General de Pagos de Productos y Aprovechamientos, por la cantidad de \$1,211.00 (MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).--- b) Con la documental pública que en copia certificada obra a foja 64 a 74 de autos, consistente en el permiso número S-1078-2001 de fecha veintidós de octubre de dos mil uno.--- c) Con los testimonios de Jaime Enrique Basurto Rosas y Marcela Patricia Orihuela Luna.--- A las cuales con fundamento en los numerales 79, 81, 82,



129, 165, 197, 215, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo, este Juzgado otorga pleno valor probatorio.--- Ello es así, pues las documentales dada su naturaleza (documental pública), por sí tienen eficacia jurídica plena.--- Y, por lo que se refiere a las testimoniales, por reunir los supuestos del artículo 215 de la Código Federal de Procedimientos Civiles, se consideran que adquieren la suficiente fuerza jurídica.--- Consecuentemente, se tienen por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad responsable.--- Establecida la presunción y certeza de actos, se procede analizar las causales de improcedencia relativas al juicio constitucional, ya sea que de oficio las aprecie el suscrito o bien, las invoquen las partes, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73, de la Ley de Amparo.--- -- CUARTO.- Dada la deficiencia de las causales de improcedencia y los argumentos que hacen valer las autoridades responsables: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Presidente de la República, y Director de Juegos y Sorteos, este Juzgado de oficio estudia las causales de improcedencia previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de la inconstitucionalidad que reclama la parte quejosa del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y

Sorteos, y su aplicación.--- Los ordenamientos antes aludidos, en primer término, al respecto disponen:--- "Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente:--- (...).--- V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.--- VI. Contra las leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesita de un acto posterior de aplicación para que se origine el perjuicio"....--- **Con el fin de abordar el estudio correspondiente relacionado con el ordenamiento que se tilda de inconstitucional; es importante destacar que el oficio número S-1078-2001 de fecha veintidós de octubre de dos mil uno, mediante el cual se concede el permiso a la parte quejosa, establece:--- ...EN RESPUESTA A SU SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE, 03 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2001, POR MEDIO DE LOS CUALES SOLICITA PERMISO PARA REALIZAR EL SORTEO DENOMINADO 'LA HORA KE-BUENA'. ESTA SECRETARÍA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN XXVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 2º, 3º, 4º, 5º, 7º Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS EXHIBIDOS Y HABIÉNDOSE OTORGADO LA FIANZA N° 2245-5955-002000 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2001, EXPEDIDA POR AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD**





DE \$4, 741.87 (CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.), PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES RESUELVE:--- OTORGAR PERMISO CON VIGENCIA DEL 29 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2001, PARA CELEBRAR EL SORTEO QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 09:29 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN [REDACTED]

[REDACTED] SUJETÁNDOSE EL MISMO A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES...--- De la transcripción que precede se demuestra que le fué aplicado el artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.--- Ahora bien, el precepto reclamado es del tenor literal, siguiente:--- "Artículo 5. En los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que se otorguen".--- Conforme al numeral referido, se puede conocer que los permisos que conceda la Secretaría de Gobernación, con independencia de



CONTE DE
NACION,
A SUE
OS.

los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, se deberán señalar las participaciones que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. --- Ahora bien, dada la naturaleza de los productos generalmente son de naturaleza heteroaplicativa, pues tratándose de éstos debe atenderse a su naturaleza específica, ya que, por regla general, la actualización de la obligación de su pago requiere de la existencia de un permiso para juegos o sorteos, siempre y cuando haya lucro con dicha actividad, y que favorezca a las personas que lo soliciten o hagan uso del mismo.--- En otras palabras, los productos se distinguen de los impuestos, debido, fundamentalmente, a que los primeros se causan por el beneficio individualizado que reciben los gobernados por los servicios públicos que les presta el Estado, o por el uso o goce de bienes de dominio público de la nación, y los segundos se generan por la realización de las situaciones de hecho o jurídicas previstas en el ordenamiento impugnado.--- De lo anterior resulta evidente que la obligación al pago de productos, es generalmente heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor, no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, como acontece cuando se obtienen productos obtenidos por el juego o sorteos autorizados, debido a que necesitan de un acto concreto de aplicación para



poder ser impugnadas en el juicio de amparo.---
 Luego entonces, para estar en posibilidad el
 gobernado de controvertir dicha disposición es
 necesario que el particular acredite que los
 supuestos en ellas contenidas se actualicen, o sea,
 que se haya ordenado en el permiso el pago de
 dichos productos, y éste los haya pagado, pues es
 en este momento cuando puede ocurrir al juicio
 constitucional.--- Por tanto, para causar perjuicio se
 requiere de un acto concreto de aplicación, y para
 ello la parte quejosa señala como primer acto de
 aplicación de las normas impugnadas el recibo
 cuya copia certificada obra a foja 75 de autos; sin
 embargo, el pago de la cantidad de \$1,211.00 (MIL
 DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MONEDA
 NACIONAL); sin embargo, los supuestos
 productos, no devienen propiamente de alguna
 orden estipulada en el permiso número S-1078-2001
 de fecha veintidós de octubre de dos mil uno.---
 Siendo así, resulta improcedente el juicio de
 amparo promovido en contra el artículo 5° de la Ley
 Federal de Juegos y Sorteos, por actualizarse las
 causas de improcedencia previstas en el artículo
 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo y, por
 ende, debe decretarse el sobreseimiento de
 conformidad con lo dispuesto en el artículo 74,
 fracción III, de la propia ley de la materia.--- Es
 aplicable, la tesis de jurisprudencia número P.
 LVII/96, visible en la página ciento veinticuatro,



COPIA
 LA
 A
 CS.

Tomo: XII, Agosto de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:--- 'LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO. (se transcribe).'- **Del mismo modo, este juzgador estima que respecto a la inconstitucionalidad del artículo 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que reclama la parte quejosa, de oficio en el caso se actualiza las causales de improcedencia previstas en los artículos 73, fracción V y XVIII, esta última en relación con los numerales 4° y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud, que el ordenamiento jurídico de referencia, por su sola vigencia no causa perjuicio a la parte quejosa, ni demostró en autos que un acto posterior de aplicación le originara un perjuicio. Ello es así por las razones siguientes:---** Los ordenamientos antes aludidos, al respecto disponen:---

"Artículo 4°. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.'---



Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente:---
(...).--- VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio.--- (...).--- '114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:--- 'I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejosos".--- **De los supuestos transcritos, se puede advertir que no procede el juicio de amparo cuando por su sola vigencia se reclame una ley, como en el caso es el artículo 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.**--- Lo que se actualiza en el presente asunto, en virtud que la parte quejosa en autos no acreditó que se le haya aplicado en su perjuicio el precepto en cuestión.--- Ello es así, tomando en consideración que dicho ordenamiento jurídico por su naturaleza es una norma heteroaplicativa, la cual para su impugnación requiere de un acto concreto de aplicación, en donde el gobernado se sitúe dentro de la hipótesis normativa, que genere, en consecuencia, la obligación de hacer o de no hacer a su cargo.--- A

fin de ilustrar la afirmación precedente debe tenerse en cuenta que los artículos 4o, 73 fracción VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas).--

- En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo.--- En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada.---- Así,



para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse ~~sus~~ supuestos.--- Al respecto es de tomar en cuenta el criterio que actualmente sustenta este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas.--- Como es la tesis de jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página ciento veintitrés, correspondientes al mes de abril de mil novecientos noventa y seis, cuyo texto literal dice:--- "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." (se transcribe).--- Sentado lo anterior, debe estimarse que el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa es improcedente, toda vez que, por lo

menos hasta el momento en que interpuso la demanda respectiva, el artículo 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, no le ocasiona agravio alguno en su esfera jurídica, al no existir el acto de aplicación que reclama, por lo que resulta incuestionable que en el presente asunto se actualizan las causales previstas en el artículo 73, fracciones VI y XVIII, la última en relación con los artículos 4° y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio conforme al precepto 74, fracción III, del mismo ordenamiento.--- Del mismo modo, la tesis de jurisprudencia número P. XCVII/95, visible en la página noventa y dos, Tomo: II, Noviembre de 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra reza:--- "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO." (se transcribe).--- No es obstáculo, para arribar a la anterior consideración el hecho que la parte quejosa, haya ofrecido como prueba de su parte la documental que obra a foja 75 de autos; sin embargo, el permiso número S-1078-2001 de fecha veintidós de octubre de dos mil uno, no estipula el pago de productos, ni tampoco que se haya recibido, como requisito para su expedición.--- Por otra parte, es importante destacar que el



sobreseimiento se hace extensivo al acto reclamado que reconoce la autoridad responsable Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en razón, que la parte quejosa en su capítulo de actos reclamados, estableció lo que se reproduce (foja 4 de autos):--- '... H) Del Director de Juegos y Sorteos, dependiente de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación se reclama:--- 1. La expedición del permiso No. S-1078-2000 de fecha 22 de octubre de 2001, a favor de mi mandante por el sorteo denominado 'LA HORA KE-BUENA', únicamente por lo que corresponde a la aplicación directa y concreta en perjuicio de mi mandante del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.--- El presente acto únicamente se reclama por lo que toca a la aplicación en perjuicio de la quejosa del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sin que específicamente se reclame algún otro numeral en sí o se reclame el permiso en mención por algún vicio propio, circunstancia que debe entenderse en el sentido de que de ser amparatoria la sentencia que derive del presente juicio constitucional, únicamente se deberá referir al numeral en cuestión sin que específicamente se invalide el permiso antes citado.'--- No habiendo alguna otra causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni que de manera oficiosa amerite su estudio, se procede al análisis de los conceptos de violación.--- QUINTO.- Ahora bien, antes de analizar los conceptos de violación,

es importante destacar que la parte quejosa, reclama del Jefe del Departamento de Área de Sorteos de la Secretaría de Gobernación, lo que se reproduce (foja 4 de autos):--- '...La orden verbal de pago efectuada en presencia de uno de los autorizados de mi mandante y posteriormente, vía telefónica, a efecto de que en términos de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, **RADIOPOLIS** efectuará el pago de \$1,211.00, por concepto de participación que de los 'supuestos' productos obtenidos por mi mandante debía corresponder al Gobierno Federal...'--- **Circunstancia que probó la parte quejosa, con los medios probatorios, siguientes:---** **Primero:** Con la documental que en copia certificada obra a foja 75 de autos, consistente en la Declaración General de Pagos de Productos y Aprovechamientos, por la cantidad de \$1,211.00 (MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); y, de cuyo contenido se conoce, que el día dieciocho de octubre de dos mil uno, realizó el pago de la cantidad y conceptos antes descritos, lo que hace presumir legalmente a este Juzgado, que existió la orden reclamada.--- **Segundo:** Con la documental que en copia certificada obra a foja 64 a 74 de autos, consistente en el permiso número S-1078-2001 de fecha veintidós de octubre de dos mil uno; y, de la que se advierte, que fue expedido después del pago a que refiere el punto que antecede, es decir, cuatro



días antes, por lo que este Juzgado considera que existe una vinculación entre el pago de productos con la expedición del permiso número S-1078-2001.--- Tercero: Con los testimonios de Jaime Enrique Basurto Rosas y Marcela Patricia Orihuela Luna, los cuales coinciden en que el contador José Alejandro Agis Lozada, ordenó el pago de productos.--- Pruebas éstas que de conformidad con los artículos 79, 81, 82, 129, 165, 197, 215, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio; además, que administradas entre sí, demuestran la existencia de la orden verbal reclamada por la parte quejosa.--- Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en la página 1837, Tomo: LXVIII, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice:--- 'ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS'. (se transcribe).- -- Preciso lo anterior, se estudia el primer concepto de violación que propone la parte quejosa, en el cual manifiesta que es inconstitucional la Ley Federal de Juegos y Sorteos, por no existir parámetros a los que deba ajustarse la participación de los productos obtenidos por los organizadores de juegos y sorteos, por tanto, considera tal facultad arbitraria

de la Secretaría de Gobernación, en consecuencia, violatoria de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- A juicio del suscrito el concepto de violación resulta parcialmente fundado (sic).--- Ello es así, pues si bien, la parte quejosa cuestiona la inconstitucionalidad de los artículos 5º y 6º de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en el caso que nos ocupa, esto no es suficiente para abordar su estudio, en virtud, que sólo se acreditó la exigencia del pago por la autorización del permiso número S-1078-2001 de fecha veintidós de octubre de dos mil uno, por parte del Jefe del Departamento de Área de Sorteos de la Secretaría de Gobernación, no así, que fuera de conformidad con los numerales 5º y 6º de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.--- Establecido lo anterior, es de advertir que resulta deficiente en su contenido, pues en el mismo no se exponen correctamente los razonamientos para desvirtuar las consideraciones del acto reclamado; no obstante lo anterior, el suscrito estima que existe una violación manifiesta que deja en estado de indefensión a la parte quejosa, por tanto, en su favor procede la suplencia de la queja en términos de la fracción VI del artículo 76 bis, del ordenamiento antes precisado, y la jurisprudencia número 2a./J. 63/98, visible en la página trescientos veintitrés, Tomo: VIII, Septiembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMACÍA DE LA LEY
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO



su Gaceta, que a la letra expone:--- 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. (se transcribe).--- En estas condiciones, este Juzgador considera que el concepto de violación en estudio es fundado, pues en el mismo sostiene entre otras que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución General de la República.--- El citado artículo, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:--- 'Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.'--- Partiendo de esta guisa se puede deducir que el imperativo antes descrito, exige a toda autoridad a que antes de emitir un acto de molestia deberá estar debidamente fundado y motivado, es decir, reviste dos aspectos a saber: el formal, que exige que el acto de autoridad sea por escrito, y que se expongan en el mismo las circunstancias de hecho, así como las normas y principios generales de derecho que la condujeron a emitir el acto; y, el material, que exige que las circunstancias de hecho encuadren en el supuesto jurídico y conforme a su más recta y sistemática interpretación.--- En estas condiciones, para considerar que un acto de molestia cumple con los requisitos del artículo



CORTE DE
LA NACION
D.A. SALA
DE ACUERDOS

constitucional descrito, es indispensable que la autoridad establezca con precisión en el escrito el ordenamiento exactamente aplicable al caso a efecto de que el gobernado esté en condiciones de conocer la disposiciones en que basa su actuación; además, expresará los motivos determinantes que lo indujeron a emitir su resolución, para que de esta manera pueda el gobernado saber si su actuación se encuentra ajustada a derecho y de considerar que le afecta en su esfera jurídica, poder impugnarla a través de los medios o recursos legalmente establecidos.--- Ello es así, pues debe recordarse que en nuestro régimen jurídico la autoridad no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley, por ello, deberá emitir sus resoluciones por escrito, y en los mismos los preceptos y motivos en que apoya su actuación, para justificar que sus actos están apegados a derecho y que no son arbitrarios; pues no basta que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de autoridad, sino que, además debe existir una adecuada motivación y fundamentación, en relación a la hipótesis normativa.--- Así las cosas, es evidente que la autoridad responsable violó, en perjuicio de la parte quejosa, el artículo 16 constitucional, pues no probó en forma alguna haber dado cumplimiento a los requisitos constitucionales, por tanto, se estima, que es una violación directa a la

SUPREMA
 JUSTICIA
 SEGUN
 SECRETARIA



Constitución, toda vez que no existe mandamiento escrito, donde funde y motive su acto.--- Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia número XXI 1o. J/6, visible en la página 61, Tomo: 65, Mayo de 1993, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:--- 'SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE LAS 'ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS, EN SI MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.(se transcribe).--- En esta tesitura, al ser inconstitucional el acto atribuido a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Área de Sorteos de la Secretaría de Gobernación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto que la autoridad responsable, cumpliendo con los requisitos del artículo 16 constitucional, emita una resolución en la que explique a la parte quejosa el concepto del pago previo de los \$1,211.00 (MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por la expedición del permiso número S-1078-2001 de fecha veintidós de octubre de dos mil uno, y como consecuencia, sea devuelto el pago que por productos y aprovechamientos realizó el dieciocho de octubre del presente año.--- Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados en las jurisprudencias y tesis que respectivamente su rubro es:--- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (se

transcribe).’--- ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.
(se transcribe).’--- ‘FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO
SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. (se
transcribe).’--- **Al resultar fundados los argumentos
en estudio de la parte quejosa, y dada la naturaleza
de los actos que impugna, resulta innecesario
ocuparse del estudio de las demás conceptos de
violación propuestos.--- Lo anterior, de
conformidad con la tesis de jurisprudencia número
XI.3o.5 L, visible en la página seiscientos veintiséis,
Novena Época, del Semanario Judicial de la
Federación, la cual establece:--- ‘CONCEPTO DE
VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL
ESTUDIO DE LOS DEMÁS. (se transcribe).’---
Finalmente no pasa inadvertido para este Juzgador,
el hecho que se hayan tenido por presuntivamente
ciertos los actos reclamados a la autoridad
responsable Secretario de Hacienda y Crédito
Público a que se refiere el considerando tercero;
sin embargo, dicha circunstancia sólo presume su
existencia, pero no exime a la quejosa de acreditar
el interés jurídico o perjuicio para reclamarlos.---
Sirve de apoyo a lo inmediato anterior, por
contener el criterio aplicable, la tesis de
jurisprudencia número 2a./J. 3/93, visible en la
página número 10, Tomo: 68, Agosto de 1993, de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en la Gaceta del Semanario**



Judicial de la Federación, la cual establece:---

'INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. (se transcribe).'---

Del mismo modo es aplicable, la tesis de jurisprudencia, visible en la página número 108, Tomo: 193-198 Primera Parte, de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es:---

'INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN CASO DE FALTA DE INFORME. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. (se transcribe).'---

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 76 a 78, 79, 80, 155, 192 y 193 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se:--- RESUELVE.--- PRIMERO.- SE SOBRESEE en

el juicio el amparo solicitado por GRUPO RADIOPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo que hace a los actos y respecto de autoridades responsables Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Director del Diario Oficial de la Federación, Presidente de la República, Presidente del Servicio de Administración Tributaria, y Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, por los motivos que se exponen en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia.--- SEGUNDO.- La JUSTICIA DE LA

*UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a GRUPO
RADIOPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, por lo que hace a los actos reclamados a la
autoridad responsable Jefe del Departamento de Área
de Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y por los
motivos y efectos que se establecen en el
considerando quinto de esta sentencia.---
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE
QUEJOSA Y POR OFICIO AL AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO A ESTE JUZGADO."*

QUINTO. Inconforme con dicha resolución, que le fuera notificada personalmente a su apoderado legal el tres de enero de dos mil dos, GRUPO RADIOPOLIS, S.A. de C.V., mediante escrito presentado por aquél el veintiuno del propio mes y año en el Juzgado de Distrito del conocimiento, interpuso recurso de revisión.

A su vez, con el fin de controvertir el referido fallo que le fuera notificado por oficio el diez de enero de dos mil dos, el Jefe de Departamento de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el día veinticuatro de enero de dos mil dos, en el Juzgado de Distrito del conocimiento.

Por acuerdo del veinticuatro de enero de dos mil dos el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia



Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en turno, para su substanciación.

En tal virtud, mediante auto del dieciocho de febrero del dos mil dos, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, admitió a trámite los mencionados recursos de revisión formándose el toca 53/2002-688.

SEXTO. Por escrito presentado ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el día veintiséis de febrero de dos mil dos, por el Director General de Asuntos Jurídicos, en ausencia del Secretario de Gobernación, señalado como autoridad responsable, se interpuso recurso de revisión adhesiva en la que se sostuvo que el juicio de amparo respectivo es improcedente al actualizarse lo dispuesto en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Por auto de veintiséis de febrero del año dos mil dos, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, admitió el referido recurso de revisión adhesiva.

Igualmente, el apoderado legal de la quejosa, mediante escrito presentado el primero de marzo de dos mil dos por la quejosa ante el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, interpuso recurso de revisión adhesiva al recurso interpuesto por la autoridad denominada Jefe de Departamento de Permisos de Sorteos, dependiente de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Por acuerdo de uno de marzo de dos mil dos el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito, admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el quejoso.

SEPTIMO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió conocer del asunto, dictó sentencia el treinta y uno de mayo de dos mil dos concluyendo con los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- En la materia de la competencia de este Tribunal Colegiado se revoca la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO.- Remítase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presente toca y el expediente del juicio de amparo 1018/2001, para lo que a bien tenga que resolver en relación con la inconstitucionalidad planteada”.

Las consideraciones que sustentaron dicho fallo son las siguientes:

“OCTAVO.- En el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la parte quejosa, manifiesta que el recurso de revisión hecho valer por el Jefe de Departamento de Permisos de Sorteos es improcedente porque no es autoridad legitimada si se toma en cuenta que el juicio de garantías deriva de la controversia contra leyes, por lo que el recurso debe promoverlo los titulares de los



órganos de Estado encomendado para la promulgación de la ley.- - - Es infundado el argumento planteado, porque en el juicio de garantías no únicamente se impugnan los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sino también los actos de su aplicación; además, la autoridad recurrente en el recurso de revisión controvierte solamente la certeza de la orden verbal que se le atribuye, así como el hecho de que en contra de ese acto se concedió el amparo solicitado por carecer de fundamentación y motivación.- - - NOVENO.- Acto continuo se procede al análisis de los agravios formulados por la parte quejosa, por haber interpuesto primero en tiempo el recurso de revisión.- - - En el primer agravio, manifiesta que el Juez del conocimiento violó el artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que en el considerando segundo de la sentencia recurrida determina que no se desvirtuó la negativa de actos atribuidos al Presidente del Servicio de Administración Tributaria, no obstante que quedó acreditada la certeza de los actos imputados a esa autoridad, ya que en la demanda de garantías señaló como actos reclamados a esa autoridad la recepción de la declaración general de pago de productos y aprovechamientos, cuya copia certificada exhibió en el juicio de garantías, correspondiente al formato SAT 16, presentada el dieciocho de octubre de dos mil uno, ante una

institución de crédito, debidamente autorizada y que se traduce en el primer acto de aplicación de los artículos que se tildan de inconstitucionales.- - Que lo anterior es así, porque se utilizó un formato fiscal debidamente autorizado, en el que aparece el logotipo y leyenda del 'Servicio de Administración Tributaria', que acredita que las participaciones que corresponden al Gobierno Federal en términos de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, fueron pagados a esa autoridad ante una institución bancaria autorizada para recibir el pago de contribuciones, conforme los artículos 6°, penúltimo párrafo y 32-B, ambos del Código Fiscal de la Federación; pues dicha autoridad fiscal es la encargada de recaudar las contribuciones de conformidad con el artículo 7°, fracción I, de su ley.- - Que el a quo, erróneamente determinó la certeza de los actos reclamados, pues no obstante que reconoce y ordena la devolución de la cantidad pagada por concepto de aprovechamientos, señala que no fue recibida por la autoridad a quien está encomendada la función de recaudarla, lo cual es contradictorio e incongruente, porque en el considerando tercero, valora correctamente la declaración, para desvirtuar la negativa del acto reclamado al Jefe de Departamento de Permisos de Sorteos, por tanto, no había razón alguna para sobreseer en el juicio en relación con el Presidente del Servicio de Administración Tributaria.- - En el



segundo agravio, manifiesta que se viola en su perjuicio el artículo 77 de la Ley de Amparo, porque la sentencia recurrida carece de fundamentación y motivación requeridas, ya que en el considerando cuarto se determina decretar el sobreseimiento en el juicio en relación con los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al actualizarse los supuestos previstos en las fracciones V, VI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que en el permiso otorgado para la celebración del sorteo no se ordenó el pago de los productos a que se refiere el artículo 5° de la ley impugnada, por lo que el pago efectuado mediante declaración general de pagos de productos y aprovechamientos, no deviene de alguna orden estipulada en el permiso otorgado, para estimar que la aplicación de la ley es heteroaplicativa.- En tales condiciones, dice que la sentencia recurrida resulta incongruente y falta de fundamentación y motivación, en atención a que el a quo supone para que se acredite la aplicación del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, debe existir previamente un permiso para juegos y sorteos con lucro, lo cual es incongruente, porque en el considerando quinto de la sentencia, se señala que el pago es previo, para que se otorgue el permiso, y no al revés.- - - Que la sentencia carece de fundamentación y motivación, porque el a quo no señala el fundamento jurídico y

razones para concluir el porqué las participaciones a que se refiere el artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se trata de productos, y no aprovechamientos que recibe el Estado, en términos del artículo 3° del Código Fiscal de la Federación.- - - Por otra parte, dice que la necesidad de la orden de pago de productos necesariamente previsto en el permiso otorgado, para efectuar el pago como perjuicio directo, carece de fundamento y motivo alguno, porque no es necesario que la orden de pago se contenga en el permiso, toda vez que si existieran los parámetros adecuados, criterios objetivos o tablas de pago o algún tipo de mecánica idónea, entonces habría la seguridad jurídica para efectuar dicho pago por la propia voluntad del particular en cumplimiento de una ley que de manera expresa prevé el monto y fundamento del pago, y evitar que el pago se determine por la facultad omnímoda y arbitraria de la autoridad administrativa de fijar lo que quiera y de la forma en que mejor le convenga, pues la orden no necesariamente implica una obligación de hacer, ya que el particular afectado puede contribuir, se insiste, por su propia voluntad, pero siempre y cuando tenga la debida seguridad jurídica o que existan esos parámetros objetivos para efectuar el pago; además, el acto concreto de aplicación se entiende si se analiza con detalle el pago efectuado y el permiso conferido, en virtud de



que el fundamento que expresamente aparece en el primero, fue el motivo por el cual se presentó la declaración correspondiente y aparece como fundamento en el permiso para la celebración del sorteo.- - - En relación con el sobreseimiento decretado por el Juez, en cuanto al artículo 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos por actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y XVIII, en relación con los diversos 4° y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, por no acreditar que se causó un perjuicio real y concreto a la quejosa, argumenta que no se encuentra debidamente fundado y motivado, contraviniéndose así el artículo 77 de la Ley de Amparo, porque la aplicación del artículo 6° es una consecuencia o efecto necesario de la aplicación del artículo 5° de la misma ley, por existir una remisión expresa de éste a aquél cuando se expidan los permisos para la realización de los sorteos que autorice la Secretaría de Gobernación, hecho que se actualiza al efectuarse el pago al obtenerse el permiso correspondiente.- - - Por tanto, el pago realizado mediante la Declaración General de Pago, formato SAT-16, fue por la aplicación de los artículos impugnados, pues de no reconocerse esa situación, no puede llegarse a la conclusión del pago y que procede su devolución, y si es así, entonces cabe preguntarse por qué concepto lo fue, pues no existe otro artículo o supuesto

normativo en todo el cuerpo de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que prevea otro pago para la realización de un sorteo.- - Asimismo, dice que el a quo no señala las razones y motivos que tuvo para hacer extensivo el sobreseimiento al acto reclamado al Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en cuanto a la expedición del permiso número S-1078-2001 de veintidós de octubre de dos mil uno, en relación con la aplicación del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sin que se haya reclamado el permiso por algún vicio propio, pues solo se limita a hacer extensivo el sobreseimiento, sin razonamiento alguno, además en el considerando cuarto de la sentencia, se reconoce en el permiso, como acto reclamado al Director de Juegos y Sorteos, la aplicación del artículo 5° de la ley en comento.- - En el tercer concepto de agravio, la parte quejosa manifiesta que se viola en su perjuicio el artículo 77 de la Ley de Amparo, en virtud de que el a quo señala a fojas 19, 20 y 21 de la sentencia recurrida, que con las probanzas aportadas sólo se acreditó la exigencia del pago por la autorización del permiso respectivo por parte del Jefe del Departamento del Área de Sorteos, no así que fuese de conformidad con los numerales 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sin embargo, no es jurídicamente posible sostenerlo, porque los conceptos a que se refiere el pago, no





son otros sino las participaciones a que se refieren los artículos que se tildan de inconstitucionales. - - Sin que sea óbice a lo anterior, ante la falta de forma escrita de la orden de pago reclamado, para estimar que no comprenda la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sino la mecánica de cómo se dieron los hechos en relación con el contenido y el aspecto material del acto. - - De manera que resulta incongruente la sentencia recurrida, ya que por un lado el propio juzgador resuelve amparar y protegerla para el efecto de que se explique el motivo del pago previo de los \$1,211.00 (MIL DOS CIENTOS ONCE PESOS 00/100M.N.), por la expedición del permiso número S-1078-2001 de veintidós de octubre de dos mil uno y por el otro, se ordena la devolución de dicho pago, es decir, está presuponiendo que el motivo es ilegal y en consecuencia violatorio de las garantías individuales de la parte quejosa, situación que evidentemente resulta contradictoria, pues desconoce el motivo manifiesto de la orden verbal de pago, que no es otro sino los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. - - DÉCIMO.- En virtud de que los agravios formulados están íntimamente vinculados, y con ellos se pretende acreditar la certeza de actos que lleva a demostrar la aplicación de los preceptos legales impugnados, procede estudiarlos de manera conjunta. - - Son



fundados los agravios descritos; pues efectivamente, mediante el permiso número S-1078-2001 de veintidós de octubre de dos mil uno, se autorizó a la parte quejosa celebrar el sorteo que tuvo verificativo el doce de noviembre de ese año, el cual se fundó, entre otros artículos, el 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que dice:- - -

"ARTÍCULO 5°.- En los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia". - - - Igualmente, el artículo 6°

de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que también se impugna, establece:- - - "ARTÍCULO 6°.- Lo

dispuesto en el artículo 5° se aplicará también en relación con los permisos que se concedan para efectuar sorteos, con excepción de los siguientes: I.-

Los que realicen las autoridades, instituciones educativas y de beneficencia para dedicar íntegramente sus productos a fines de interés general.

II.- Los que se celebren con fines exclusivos de propaganda comercial; y III.- Los que se verifiquen como sistema de ventas y en los que los participantes

reciban íntegramente el valor de sus aportaciones en



mercancías, efectos u otros bienes".- - - De los preceptos legales transcritos, se aprecia que cuando la Secretaría de Gobernación otorga permisos para celebrar sorteos, independientemente de los impuestos que pudieran determinarse, se señalará también la participación que corresponda al Gobierno Federal, de los productos que obtenga el permisionario; es decir, de los beneficios o aprovechamientos obtenidos en la venta de los boletos para efectuar los sorteos comprendidos en el artículo 6° de esa ley.- - - De manera que, si la parte quejosa el dieciocho de octubre del año dos mil uno (tres días antes de que se expidiera el permiso para celebrar el sorteo), realizó el pago de las participaciones a que se refiere el artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mediante el formato cuya copia certificada obra a foja 75 del expediente del juicio de amparo, a nombre del Servicio de Administración Tributaria, ante la institución de crédito BITAL, es claro que lo hizo en acatamiento de los preceptos legales que impugnó, en virtud de que el primero de ellos establece que en los permisos que la Secretaría de Gobernación conceda para celebrar sorteos, se señalará la participación que corresponda al Gobierno Federal.- - - No es óbice a lo anterior, el hecho de que el pago se realizó antes de la fecha de la expedición del permiso otorgado y que la orden de pago no se dispuso en dicho permiso, en

atención a que si primero se efectuó el pago y luego se expidió el permiso correspondiente, ya no era necesario establecerlo en éste, precisamente, porque se efectuó con anticipación.- - De manera que, no es exacto lo que afirma el Juez de Distrito, en el sentido de que no se acreditó el acto reclamado al Presidente del Servicio de Administración Tributaria, consistente en la recepción del pago de la participación de los supuestos productos obtenidos por la parte quejosa en la celebración del sorteo de que se trata, pues si bien es cierto que el depósito se hizo ante una institución de crédito, también lo es que el formato utilizado está a nombre del Servicio de Administración Tributaria, máxime que en términos del artículo 7º, fracción I, de la Ley de Servicio de Administración Tributaria, establece que esa Administración tendrá como atribuciones, entre otras, recaudar los productos y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable, en relación con el artículo 3º, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, al establecer éste que son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en funciones de derecho privado, así como el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio público, para estimar que son utilidades las que derivan de la celebración de los sorteos autorizados por la Secretaría de Gobernación, cuyo control fiscal se lleva a través



de las instituciones de crédito en términos del artículo 32-B del código tributario.- - - En consecuencia, sí se aplicaron en perjuicio de la parte quejosa los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, aun cuando en el permiso otorgado no se cuantificó la participación que corresponde al Gobierno Federal, respecto de los productos obtenidos por la celebración del sorteo autorizado, así como el hecho de que en dicho permiso no se ordenó su pago en esos términos, en virtud de que en la condición veingésima del permiso relativo, se establece que todos los impuestos, derechos y cualquier otra obligación fiscal que se origine por la celebración del sorteo, o por la entrega de premios, serán cubiertos por la permissionaria.- - - En efecto, la materia del sorteo como se aprecia del permiso otorgado a la parte quejosa, consiste en que los participantes o radioescuchas del programa "LA HORA QUE BUENA", que se transmite por la XEQFM, 92.9 MHz, de lunes a viernes, a las 09:29 A.M., el conductor del programa los invitará a que marquen un número telefónico que se les indicará, para el registro de sus datos personales; asimismo, el conductor les informará el número con el que quedaron registrados, para participar en el sorteo; quienes en el caso de beneficiarse, obtendrán como premios planchas, tostadores, licuadoras y hornos de microondas; en tales condiciones, el sorteo

autorizado no encuadra en las excepciones del artículo 6°, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para estimar que no es aplicable el artículo 5° de esa ley, ya que se refiere a los sorteos realizados por las autoridades, instituciones educativas y de beneficencia para dedicar íntegramente sus productos a fines de interés social; los que se celebren con fines exclusivas de propaganda comercial; y los que se verifiquen como sistema de ventas y en los que los participantes reciban íntegramente el valor de sus aportaciones en mercancías, efectos u otros bienes.- - - Luego entonces, no es exacto lo afirmado por el juez del conocimiento en los considerandos segundo y cuarto de la sentencia recurrida, en el sentido de que no es cierto el acto reclamado al Presidente de Servicio de Administración Tributaria, por no haberse desvirtuado la negativa de actos manifestada en el informe justificado que esa autoridad rindió; y que en relación con los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se actualiza las causas de improcedencia previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, al estimar que esas disposiciones no le fueron aplicadas a la parte quejosa y, por ende, no le causan perjuicio, pues como está demostrado, sí se aplicaron en perjuicio de la recurrente los preceptos legales impugnados y, por tanto, tiene interés jurídico para combatirlos.- - - Sirve de



apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 31, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Pleno, Octava Epoca, al *Semanario Judicial de la Federación*, que dice:-

- "INTERÉS JURÍDICO CONTRA PRECEPTOS NO CITADOS COMO FUNDAMENTO. SE ACREDITA SI TIENEN APLICACIÓN.- Si como consecuencia del

cumplimiento que la quejosa debe hacer del acto reclamado, se aprecia que los preceptos cuya inconstitucionalidad se reclaman tendrán aplicación, el interés jurídico para impugnarlos debe tenerse por acreditado aunque no hayan sido citados como fundamento del acto reclamado.

- Atento a lo expuesto, procede revocar el sobreseimiento decretado en los considerandos segundo y cuarto de la sentencia recurrida, en virtud de que se desvirtuó la negativa de actos manifestada por el Presidente del Servicio de Administración Tributaria en el informe justificado que rindió y, por ende, también se acredita la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

DECIMO PRIMERO.- En segundo lugar, procede analizar los agravios formulados por la autoridad responsable Jefe del Departamento de Permisos de Sorteos de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en cuanto controvierte la certeza de la orden verbal que se le atribuye.- - Manifiesta que el juzgador violó en su perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo,

en relación con los diversos 79 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria del juicio de garantías, al estimar que la parte quejosa probó la orden verbal de pago efectuada en presencia de uno de los autorizados y posteriormente, por la vía telefónica, en términos de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para que la parte quejosa efectuara el pago de la cantidad de \$1,211.00, por concepto de participación que corresponde al Gobierno Federal, de los supuestos productos obtenidos en la celebración del sorteo autorizado, no obstante que el a quo sobreseyó en el juicio en relación con los artículos reclamados, al considerar que no existe un acto concreto de aplicación de éstos y, por otro, estima como cierto un acto que no lo es, respecto del cual, en la propia demanda de garantías, la parte quejosa sostiene que se emitió con fundamento en los preceptos legales citados.- - - Asimismo, dice que jurídicamente es inadmisibile pretender tener por cierta la orden verbal de pago, cuando el propio juzgador reconoce que no existe el acto de aplicación de los preceptos legales impugnados.- - - Que no es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Juez de Distrito estime transgredido el artículo 16 constitucional, ante una supuesta falta de fundamentación, porque es la propia quejosa la que afirma que la orden de pago tiene sustento en los



artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.- - - Que en ese orden de ideas, al sobreseer el Juez de Distrito en el juicio por no existir un acto concreto de aplicación, no debió decretar la certeza de un acto que no existe. - - - En el segundo agravio, argumenta que se viola en su perjuicio el artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, al tener por cierto un ~~acto~~ inexistente, porque se parte de una premisa errónea, en atención al considerarse que la parte quejosa probó la orden verbal con la Declaración General de Pagos de Productos y Aprovechamientos, por la cantidad de \$1,211.00 (MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); el permiso número S-1078-2001 de veintidós de octubre de dos mil uno; las declaraciones de diversos testigos, ya que respecto de la primera prueba, es contrario a lo sostenido en la sentencia combatida, porque la Declaración General de Pagos no constituye el medio probatorio idóneo para tener por cierto el acto reclamado, si se toma en cuenta que ese pago se enteró a favor de la Tesorería de la Federación y no de la Secretaría de Gobernación o de la autoridad recurrente; además, de su contenido no se aprecia que el pago obedece a una orden; de manera que, es falso que del contenido de esa documental se puede presumir que existió la orden reclamada.- - - En relación con el permiso número

11 11
NAL 11
S. 11
CUER 11

S-1078-2001 de veintidós de octubre de dos mil uno, que autoriza celebrar el sorteo, dice que tampoco es prueba idónea para tener por cierto la orden reclamada, ya que en el supuesto de que existiera una vinculación entre el pago de productos con la expedición del permiso S-1078-2001, no necesariamente acredita la existencia de la orden verbal de pago, porque el pago no fue recepcionado por la autoridad recurrente, ni expidió el permiso de referencia.- - - Por lo que respecta a las declaraciones testimoniales, sostiene que tampoco son idóneas, para acreditar la orden verbal y, por tanto, se aplicó de manera indebida la tesis invocada por el Juez de Distrito, la cual si bien es cierto es de observancia obligatoria, debe analizarse de manera integral con los demás criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación; luego, aun cuando esa jurisprudencia establece que el afectado puede demostrar a través de declaraciones de testigos la existencia de la orden verbal, no significa que necesariamente debe actualizarse esa circunstancia, porque los testigos no son los idóneos para comprobar la existencia del acto reclamado, pues no reúnen características legales para otorgarle pleno valor probatorio a su dicho, en razón de que el juez pasó por alto que esas personas, son las mismas, según se desprende de la demanda de garantías, que tuvieron participación en el surgimiento del acto



reclamado, quienes precisamente, recibieron dicha orden de la responsable, hechos no conforme con los lineamientos fijados tanto en la Ley de Amparo como en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de garantías.- - - Previamente al estudio de los agravios de referencia, este tribunal colegiado aprecia que en el acta de audiencia relativo al desahogo de la prueba testimonial, antes del examen de los testigos, no consta su edad, estado civil, lugar de su residencia, ocupación domicilio, si son o no parientes consanguíneos o a fin de alguno de los litigantes, en su caso, en que grado; si tienen interés directo en el pleito o en otro semejante, y si son amigos íntimos o enemigos de alguna de las partes, como lo establece el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; no obstante, se estima ocioso revocar la sentencia recurrida para ordenar la reposición del procedimiento, en virtud de que la objeción planteada en cuanto a la certeza de la orden verbal reclamada determinada en la sentencia recurrida, tiene como objeto desvirtuar la existencia de ese acto, para demostrar a su vez, que no se aplicaron en perjuicio de la parte quejosa los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, hechos que están acreditados en el considerando que antecede de esta ejecutoria; de

manera que, con independencia de resultar fundados o no los agravios de la autoridad recurrente, la aplicación de esas disposiciones está demostrada mediante el estudio efectuado en dicho considerando; además, la omisión antes señalada no se cuestiona y, por otra parte, los testigos fueron identificados y protestados legalmente.- - Son infundados los agravios de la autoridad recurrente; en efecto, aun cuando el juez del conocimiento sobreseyó en el juicio en relación con los preceptos legales impugnados, por estimar que no se aplicaron a la parte quejosa y, por otra parte, sostiene que en términos de la declaración de pago de la participación del Gobierno Federal, de los productos obtenidos en la celebración del sorteo, el permiso otorgado para ese efecto y de las declaraciones de los testigos, se encuentra acreditada la orden verbal de pago, en virtud de que de la valoración de esas pruebas, se desprende que el depósito de la cantidad correspondiente ante el banco BITAL, es por concepto de participación del Gobierno Federal, de los productos generados en la celebración del sorteo autorizado por la Secretaría de Gobernación, pues así se asentó en dicha declaración, al hacerse constar que es por concepto de participación previsto en el artículo 5º de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el cual establece que en los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto



determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal; sorteo que efectivamente, fue autorizado mediante permiso S-1078-2001 de veintidós de octubre del dos mil uno, que tiene como fundamento el precepto legal antes citado, cuya condición vigésima obliga al permisionario a cubrir todos los impuestos, derechos y cualquier otra obligación fiscal que se genere por la celebración del sorteo o por la entrega de los premios; hechos que, al vincularse con las declaraciones de los testigos Jaime Enrique Basurto Rosas y Marcela Patricia Orihuela Luna, en cuanto al contestar a la primera pregunta, manifiestan que prestan sus servicios a la parte quejosa, consistentes en gestionar trámites para obtener permisos para la celebración de sorteos; a la segunda, que conocen los requisitos requeridos para obtener esos permisos; a la tercera, el primero declaró haberse presentado el dieciocho de octubre del dos mil uno, en las oficinas de la Dirección de Juegos y Sorteos con el propósito de entrevistarse con el contador Alejandro Agis, a fin de obtener una respuesta sobre el fundamento del cobro de aprovechamiento por el permiso que solicitó el Grupo Radiópolis, y el segundo testigo, declaró que en esa fecha habló para que le dieran el pago de derechos; a la cuarta,

coinciden en manifestar que Alejandro Agis Lozada es Jefe de Area de Sorteos de la Dirección de Juegos y Sorteos; a la quinta, el primero manifiesta que se le indicó verbalmente que dicho pago debía hacerse conforme un tabulador, a decir del contador Agis y, el segundo, respondió que el pago de derechos es por la autorización del permiso; y al contestar por la razón de su dicho, ambos manifestaron que gestionaron los trámites para obtener el permiso número S1078-2001; con los cuales se acredita que efectivamente, Alejandro Agis Lozada en su carácter de Jefe de Departamento de Permisos de Sorteos de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, ante las personas que tramitaron el permiso número S-1078-2001, les indicó de forma verbal el pago de la cantidad de \$1,211.00, por el permiso otorgado para efectuar dicho sorteo, los que adminiculados con el depósito de la cantidad efectuada ante el banco BITAL, por concepto de participación del Gobierno Federal, de los productos generados en la celebración del sorteo autorizado por la Secretaría de Gobernación, en acatamiento del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que establece que en los permisos que se conceda, independientemente del pago de los impuestos que al efecto se determinen, dicha Secretaría señalará la participación que corresponda al Gobierno Federal, de los productos



obtenidos por la celebración de sorteos; luego, si mediante permiso número S-1078-2001 de veintidós de octubre del dos mil uno, se autorizó a la parte quejosa celebrar el sorteo de que se trata, y que tiene su fundamento el precepto legal antes citado, cuya condición vigésima obliga al permisionario a cubrir cualquier obligación fiscal que se genere por la celebración del sorteo o por la entrega de los premios; y con las declaraciones de los testigos, en el sentido de que el pago de la cantidad de 1,211.00, se realizó atendiendo a una orden verbal por el permiso otorgado, es claro que también se acredita la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.- - De manera que, es irrelevante que el depósito de la cantidad antes precisada no se hizo ante la autoridad recurrente, ya que el artículo 3°, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, considera que son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en funciones de derecho privado, así como el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio público; en tal virtud, el pago o recaudación de los productos derivados de las utilidades por la celebración de los sorteos autorizados por la Secretaría de Gobernación, deben estimarse como un control fiscal que se lleva a través de las instituciones de crédito en términos del artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación.- - Por otra parte, la

circunstancia de que los testigos que intervinieron directamente en el trámite del permiso otorgado, tampoco afecta el valor de sus declaraciones testimoniales, en virtud de que el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme el artículo 2° de la Ley de Amparo, no prevé ninguna excepción al establecer que todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos; por tanto, si la autoridad recurrente no demuestra que relación existente entre los testigos y la parte quejosa trasciende en las declaraciones, éstas tienen pleno valor probatorio.- - - DÉCIMO SEGUNDO.- En virtud de que en sus agravios la autoridad recurrente Jefe de Departamento de Permisos de Sorteos de la Dirección de Juegos y Sorteos y el Secretario de Gobernación en el recurso de revisión adhesiva que interpuso, manifiestan que el Juez de Distrito omitió estudiar las causas de improcedencia formuladas en los diversos informes justificados, se procede analizarlas.- - - El Secretario de Hacienda y Crédito Público en el informe justificado que rindió, manifiesta que en el juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por estimar que la parte quejosa no formuló concepto de violación alguno para



combatir el refrendo de la ley reclamada.- - - Es infundada esta causa de improcedencia, en virtud de que en los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, la parte quejosa cuestiona, entre otros, el que los preceptos legales impugnados no establecen la forma de cuantificar la participación del Gobierno Federal de los productos que se obtienen en la celebración de los sorteos autorizados por la Secretaría de Gobernación; de manera que, es suficiente que haya expresado argumentos contra las normas legales reclamadas, para que su eficacia o falta de fundamento trasciendan tanto a la promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la ley; además, la promovente del juicio de garantías no combate el refrendo por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad lo hace depender de la propia ley, por tanto, no tiene por qué expresar conceptos de violación respecto de ese acto.- - - Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 29, Volumen Primera Parte, XLVII, Pleno, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:- - - "AMPARO CONTRA LEYES. REFRENDO.- Es suficiente expresar conceptos de violación contra la norma legal impugnada, para que su eficacia o falta de fundamento trasciendan tanto a la promulgación, publicación, refrendo y aplicación de dicha norma. Por lo mismo sólo existe necesidad de invocar conceptos de violación especiales para el refrendo, si éste

hubiera sido combatido por vicios propios, independientemente de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma respectiva".- - - El Secretario de Hacienda y Crédito Público y Director de Juegos y Sorteos, en los informes justificados que rindieron manifiestan que en el juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley Amparo, en atención a que los actos que ahora reclama la parte quejosa no constituyen el primer acto de aplicación de los preceptos legales impugnados, ya que anteriormente había efectuado pagos por los conceptos previstos en el artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos respecto de un diverso permiso que se le otorgó.- - - También es infundada dicha causa de improcedencia, en atención a que si bien es cierto que a fojas de la 391 a la 398 del expediente del juicio de amparo número 1018/2001, obra copia certificada del permiso número 11090, otorgado para celebrar un sorteo al SISTEMA RADIOPOLIS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que se fundó entre otros artículos, el 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, también lo es que en esa documental no se aprecia que se haya requerido a la parte quejosa pagar el concepto de participación del Gobierno Federal, de los productos obtenidos en la celebración del sorteo autorizado, ni mucho

RECEBIDO
SUPLENTE
SECRETARIA



menos que la permisionaria haya efectuado el pago por ese concepto, para estimar que fuera obligatoria la obligación de cubrirlo.- - - El Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, aduce que en el juicio de garantías también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el sorteo autorizado mediante el permiso número S-1078 de veintidós de octubre de dos mil uno, se celebró el doce de noviembre de ese año, y que por tanto, ya cesaron los efectos de los actos reclamados.- - - Igualmente, es infundada esta causa de improcedencia, porque la parte quejosa no reclama el permiso antes indicado, para evitar la celebración del sorteo, sino fundamentalmente, el pago de los productos generados en la celebración del sorteo, en la parte que corresponde a la participación del Gobierno Federal, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y de la orden verbal emitida por la autoridad recurrente, precisamente, para que pudiera celebrar ese evento.- - - DÉCIMO

TERCERO.- En virtud de que resultaron infundados los agravios formulados por la autoridad recurrente tendientes a desvirtuar la certeza de la orden verbal de pago que se le atribuye y las causas de improcedencia planteadas en los informes justificados, aunado a que del estudio realizado se



ORTE DE
A. I. N. C. I. P.
A. S. A. L. A.
A. V. E. R. D. E. C.

acredita que el pago efectuado por la parte quejosa por la cantidad de \$1,211.00, es en cumplimiento de esa orden atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; es decir, que a través de la orden verbal también se acreditó la aplicación de los preceptos impugnados, y no como equivocadamente lo sostiene el Juez de Distrito, procede modificar la última parte del considerando tercero de la sentencia recurrida, y hacer extensivo la revocación al considerando quinto de la sentencia, en el que se concedió el amparo en contra de la orden verbal de pago por carecer éste de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 constitucional, ya que al acreditarse la aplicación de los artículo 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, deberá primero analizarse la inconstitucionalidad planteada, y sólo en el caso de que la ley no sea inconstitucional, procede estudiar los actos de aplicación cuando se impugnan por vicios propios.- - - Ante lo expuesto, debe declararse sin materia el tercer agravio formulado por la autoridad recurrente, mediante el cual controvierte el considerando quinto de la sentencia recurrida, en virtud de que éste se revocó en términos del párrafo que antecede.- - - DÉCIMO CUARTO.- Demostrada la aplicación en perjuicio de la parte quejosa de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, lo procedente es



dejar a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y remitirle este toca y los autos del juicio de amparo 1018/2001 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de acuerdo con lo que establece el punto Décimo Primero del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno.-

- - Ello es así, porque la competencia originaria para conocer del presente asunto corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con el artículo 84, fracción I, inciso a), por tratarse de un asunto que dicho Alto Tribunal conserva para su resolución.- - - Para llegar a tal conclusión, se hace necesario acudir a lo dispuesto en el multicitado Acuerdo General Número 5/2001, cuyos puntos Tercero, Cuarto y Quinto, disponen lo siguiente: (se transcribe) - - - Conforme al punto Quinto, fracción I, inciso A) transcrito, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de los recursos de revisión en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito, cuando, a pesar de haberse impugnado una ley federal, en la sentencia recurrida no se hubiere

abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio, o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.-

- - En el caso que nos ocupa, se surtió la competencia de este tribunal, precisamente porque en el considerando segundo de la sentencia recurrida se sobreseyó en el juicio, debido a que no se acreditó la aplicación de una ley federal, pero del análisis de los agravios formulados se revocó el sobreseimiento al demostrarse la aplicación de la ley federal impugnada.- - - Ahora bien, el Punto Décimo Primero del citado Acuerdo dispone: (se transcribe) - - - Conforme al precepto transcrito, en caso de no surtirse las hipótesis del punto Quinto, fracción I, incisos B), C) y D), de este acuerdo en comento, lo procedente es dejar a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- - - En la especie, la norma cuya inconstitucionalidad se reclama no es una ley local, ni un reglamento federal o local, sino una ley federal, como lo es la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Además no se trata de un asunto relacionado con la práctica de una visita domiciliaria, ni multas y arrestos administrativos, ni procedimientos administrativos que ordenen el aseguramiento o embargo de bienes, ni del procedimiento administrativo de ejecución; ni afectación a la actividad de los concesionarios del



ESTADOS UNIDOS
SUPREMA C
CORTA DE J
FUND
SECRETARIA DE



servicio público de transporte, ni el cese o suspensión de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, ni se trata tampoco de un asunto de fianzas, sino de la forma en que se debe cuantificar la participación del Gobierno Federal de los productos que se obtienen en la celebración de los sorteos autorizados por la Secretaría de Gobernación. Asimismo, sobre el tema debatido no existe tesis alguna, ni mucho menos se ha integrado jurisprudencia del Pleno ni de las Salas.-
- - Bajo este orden de ideas, al tratarse de un recurso de revisión en el que se planteó la inconstitucionalidad de una ley federal respecto de la cual no existe ninguna tesis, ni mucho menos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, lo procedente es dejar a salvo su jurisdicción y remitir este toca, así como el expediente de amparo 1018/2001, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a ese Alto Tribunal".

Recibidos los autos del juicio de amparo relativo, el Presidente de este Alto Tribunal, por acuerdo del dos de agosto de dos mil dos, ordenó formar y registrar el toca de revisión 249/2002; dispuso que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumía su competencia originaria para conocer del recurso de revisión y ordenó que se corriera traslado con el escrito de expresión de agravios al Ministerio Público Federal adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento.

Posteriormente, mediante proveído presidencial del veintiséis de agosto del año indicado, se turnó el asunto al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para la elaboración del respectivo proyecto de resolución.

Previo dictamen del Ministro ponente y una vez dictados los acuerdos presidenciales correspondientes, el presente asunto quedó radicado en esta Segunda Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; Cuarto Transitorio del Decreto de Reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y al tenor de lo previsto en los puntos Cuarto en relación con el Tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio del dos mil uno, en virtud de que se interpuso con posterioridad a esa fecha en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y en esta instancia subsiste dicha problemática, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno ya que para su resolución resultan directamente aplicables diversos criterios jurisprudenciales y



dados de este Alto Tribunal, lo que revela que su resolución no reviste un interés excepcional.

SEGUNDO. En virtud de que conforme a lo dispuesto en los puntos Quinto, fracción I, inciso A) y Décimo Primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó el sobreseimiento decretado por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa con residencia en el Distrito Federal respecto de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y declaró infundadas las diversas causas de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables en sus informes justificados, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe abordar el estudio de los conceptos de violación cuyo estudio se omitió, tal como lo prevé el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.

Como se advierte de la lectura de los diversos conceptos de violación que transcritos quedaron en el resultando Tercero de este fallo, la quejosa atribuye diversos vicios a lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sosteniendo que la regulación de la prestación patrimonial de carácter público que en el primero de ellos se prevé transgrede los derechos fundamentales tutelados en diversos preceptos de la Constitución General de la República. En tal virtud y dadas las particularidades de dicha regulación, antes de abordar el estudio de los referidos conceptos de violación, resulta necesario precisar

cuál es la naturaleza del ingreso público controvertido. Al efecto, destaca que los citados numerales establecen:

“ARTÍCULO 5º. En los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que se otorguen.

“ARTÍCULO 6º Lo dispuesto en el artículo 5º se aplicará también en relación con los permisos que se concedan para efectuar sorteos, con excepción de los siguientes:

- I.- Los que realicen las autoridades, instituciones educativas y de beneficencia para dedicar íntegramente sus productos a fines de interés general;***
- II.- Los que se celebren con fines exclusivos de propaganda comercial; y***
- III.- Los que se verifiquen como sistema de ventas y en los que los participantes reciban íntegramente el***



valor de sus aportaciones en mercancías, efectos u otros bienes".

En los artículos antes transcritos el legislador dispone que la Secretaría de Gobernación señalará la participación que debe corresponder al gobierno federal de los productos obtenidos por los gobernados que obtengan un permiso para celebrar un juego o un sorteo de los permitidos en el artículo 2° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Es decir, en el artículo 5° del referido ordenamiento se establece a cargo de los gobernados que obtengan un permiso para realizar un juego o sorteo, la obligación de enterar al gobierno federal una prestación patrimonial de carácter público, a la que denomina "participación" la que, indudablemente, constituye un ingreso público del Estado.

Ahora bien, tomando en cuenta que tal denominación no corresponde a la de alguna de las categorías de ingresos públicos que prevé el Código Fiscal de la Federación y, además, que para analizar la constitucionalidad de una prestación patrimonial de carácter público esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que resulta irrelevante el nombre o categoría que le atribuya el legislador ordinario, en el presente asunto resulta necesario precisar si la referida "participación" constituye una contribución o un ingreso no tributario del Estado y, en su caso, a qué especie de contribución corresponde.

En relación con la potestad de este Alto Tribunal para analizar la constitucionalidad de una prestación patrimonial de carácter público atendiendo a su naturaleza y no a su denominación, debe tenerse presente que desde la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, esta Suprema Corte de Justicia sustentó el criterio consistente en que el estudio de constitucionalidad de una contribución debe realizarse de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica, con independencia de la denominación que le den las partes o incluso la ley, tal como se corrobora con la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

“TRIBUTOS. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON SU VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE LE DEN LAS PARTES O INCLUSO LA LEY. Aun cuando la ley atacada de inconstitucionalidad llame al tributo controvertido "derecho"; y las autoridades responsables lo conceptúen como "derecho de cooperación", y el quejoso se empeñe en sostener que es un "impuesto especial", lo cierto es que este Supremo Tribunal debe analizar el gravamen de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica independientemente de la denominación que le den las partes”.

(Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79 Primera Parte, Página: 28).



Posteriormente, al enfrentar el análisis de constitucionalidad de prestaciones patrimoniales de carácter público, esta Suprema Corte de Justicia abordó su estudio con el fin de concluir si atendiendo a su naturaleza las mismas tenían el carácter de contribuciones. Al efecto, resultan ilustrativas las tesis que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO TIENEN CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES. Las cuotas obrero-patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social no tienen carácter de contribuciones, porque no se apoyan en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, sino en las fracciones XIV y XXIX del artículo 123 de la Carta Magna, y la finalidad del establecimiento de las primas es distinta a la de los tributos; pues, mientras las primeras tienen como objetivo una protección a favor de los trabajadores contra los riesgos y eventualidades que pudieran suceder en el desempeño de sus labores, los segundos tienen como objetivo contribuir a los gastos públicos de la federación, de los estados o de los municipios, con independencia de que el artículo 267 de la Ley del Seguro Social establezca que el pago de las cuotas, los recargos y los capitales constitutivos tienen carácter fiscal, pues tal aseveración es, por una parte, puramente práctica, y por la otra, el término fiscal es genérico y puede aplicarse tanto a los

impuestos como a cualquiera otra prestación o contraprestación a favor del Estado o de un organismo descentralizado que, por estar prevista en la ley como obligación a cargo de los particulares, puede ser exigida coactivamente, sin que ello signifique, por necesidad, que se trata de las contribuciones a que alude el artículo 31, fracción IV, constitucional”.

(Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, Página: 120).

(PRECEDENTE HISTÓRICO SUPERADO EN CUANTO AL TEMA DE FONDO).

“SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO ESTÁN SUJETAS A LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD PREVISTOS PARA LOS IMPUESTOS. Las cuotas obrero-patronales que se paguen al Instituto Mexicano del Seguro Social tienen su origen y fundamento en el artículo 123, fracciones XIV y XXIX, de la Constitución, y no en el artículo 31, fracción IV, de la propia Ley Fundamental, por lo que no pueden ni deben quedar sujetas a los requisitos de proporcionalidad y equidad a que alude el artículo 31, fracción IV, mencionado, especialmente si se considera que: a).- Las cuotas de referencia tienen el carácter de primas y no de contribuciones; b).- En cuanto a su asimilación con



los créditos fiscales, sólo tienen un fin meramente práctico, dada la exigencia de la prestación del servicio público de seguro que al Instituto Mexicano del Seguro Social le fue encomendado por el Congreso de la Unión, y c).- El interés público existente para que dicha prestación sea suministrada con eficiencia y oportunidad en beneficio de los asegurados".

(Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, Página: 37).

(PRECEDENTE HISTÓRICO SUPERADO EN CUANTO AL TEMA DE FONDO).

"SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. Del examen de lo dispuesto en los artículos 2o. del Código Fiscal de la Federación y 260, 268, 269, 271 y demás relativos de la Ley del Seguro Social, se desprende que las cuotas al Seguro Social son contribuciones, no sólo por la calificación formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados, al concebirlas como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son substituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social, o de las personas que se benefician en forma especial por

servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado sino que, por su naturaleza, son obligaciones fiscales que deben ceñirse a los principios tributarios, ya que se advierte de la evolución legislativa que el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituido desde sus orígenes como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, se convirtió en un organismo fiscal autónomo encargado de prestar el servicio público de seguridad social, investido de la facultad de determinar los créditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos a través del procedimiento económico-coactivo y que, por lo mismo, en su actuación debe observar las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público”.

(Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Tesis: P./J. 18/95, Página: 62).

En estrecha relación con lo anterior, la actual integración de esta Suprema Corte de Justicia al abordar la constitucionalidad de diversos tributos ha partido por desentrañar su naturaleza, como se advierte en las tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

“APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DETERMINAR SU PROPORCIONALIDAD DEBE



ATENDERSE A SU NATURALEZA DE CONTRIBUCIÓN PECULIAR. Esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que para establecer la proporcionalidad de las contribuciones debe atenderse a la naturaleza de cada una operando criterios diferentes respecto de los impuestos, los derechos y otro tipo de gravámenes. Tratándose de aportaciones de seguridad social, debe establecerse que no basta atender al "beneficio obtenido" pues ello desvirtuaría el propósito de solidaridad social que abrigó la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de que se estableciera un sistema de salud y seguridad general que protegiera a las clases económicas más desfavorecidas. La visión que apoyó la existencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue impulsada por el liberalismo de corte individualista que caracteriza a otros sistemas, sino dentro del contexto social que identificó a la Constitución de 1917. Lo anterior permite concluir que, para efectos de establecer el criterio que debe regir la proporcionalidad, tratándose de las aportaciones de seguridad social, si bien se debe atender, en un aspecto, a la de los impuestos y, por tanto, tomar en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente, debe considerarse básicamente que se trata de una contribución peculiar con un claro sentido social y sustentada en la solidaridad".

(Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Octubre de 1995, Tesis: P. LXX/95, Página: 74).

"CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. LAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE A NUEVOS DEMANDANTES, TIENEN LA NATURALEZA DE DERECHOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994). El referido artículo preceptúa: "Tratándose de las obras de agua potable y drenaje proporcionadas por el Departamento del Distrito Federal, aun cuando se trate de obras de captación de agua o drenaje realizadas por la Federación o fuera del Distrito Federal, se causarán contribuciones de mejoras, en los siguientes términos: I. Por la dotación del servicio de suministro de agua potable y drenaje a nuevos demandantes del mismo, se pagarán contribuciones de mejoras utilizando la forma oficial aprobada por las autoridades fiscales, conforme a las siguientes cuotas ...". La doctrina ha considerado, en términos generales, que las contribuciones de mejoras son un tipo de contribución especial que se paga, no por un servicio que el Estado presta, sino por el beneficio específico que determinadas personas reciben de



éste. El contribuyente experimenta un beneficio especial consistente en el incremento del valor de sus bienes, obteniendo una ventaja que el resto de los habitantes de la comunidad no perciben. Aun cuando el citado artículo 53, fracción I, establece el cobro de contribuciones de mejoras a nuevos demandantes del servicio, lo cierto es que la obra pública ya existe; por tanto, no se surte la hipótesis de mejora de obras públicas cuando el particular que demanda el servicio no recibe un beneficio específico con la construcción de la obra, requisito indispensable para que se den este tipo de contribuciones, porque se trata de nuevos demandantes, los cuales tienen al filo de su banqueta el servicio de agua potable y drenaje, pues ya está tendida la red y la autoridad únicamente autoriza la prestación de ese servicio. Por tal motivo, la norma tributaria prevé el pago de un derecho, impropriamente denominado contribución de mejoras, que se paga al Estado como contraprestación del servicio administrativo consistente en autorizar la prestación del servicio de agua potable y drenaje, el cual se otorga en función del interés general, y no de un grupo determinado de particulares".

(Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Agosto de 1997, Tesis: P. CXXVII/97, Página: 39).



"CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD APLICABLE CON MOTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 308 REFORMADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; SU NATURALEZA JURÍDICA. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2o., 4o., 5o. y 6o. del Decreto 308 reformado, expedido por el Congreso del Estado de Nuevo León, reformado por los diversos 109, 531 y 3 publicados en el Periódico Oficial de esa entidad federativa los días veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, tres de octubre y trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, en relación con los diversos 41 bis-9 a 41 bis-26 de la Ley de Hacienda para los Municipios de esa entidad federativa, se advierte que la contribución denominada impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad, no tiene la naturaleza propia de los impuestos, en tanto que su hecho generador no está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, sino por el beneficio particular a favor de determinadas personas con motivo de una obra pública tendente a satisfacer una necesidad colectiva, esto es, se trata de un tipo de contribución especial que se paga en relación con un beneficio especial consistente en el incremento del valor de los



bienes, obteniendo una ventaja que el resto de los habitantes de la comunidad no percibe".

(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Julio de 2000, Tesis: 2a. LXXII/2000, Página: 155).

"CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. EL ARTÍCULO 6o. DEL DECRETO LEGISLATIVO 308 REFORMADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE ESTABLECE QUE LOS PREDIOS DESTINADOS A CASA HABITACIÓN, NO PAGARÁN EL IMPUESTO SOBRE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD, PREVISTO EN LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Tomando en consideración que la naturaleza del impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad, previsto en los artículos del 41 bis-9 al 41 bis-26 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, es la de una contribución de mejoras, en tanto se establece con motivo del hecho generador consistente en el beneficio particular a favor de determinadas personas con motivo de una obra pública tendente a satisfacer una necesidad colectiva, es claro que debe gravar sin excepción, a todos aquellos sujetos que reciban un beneficio especial consistente en el incremento del valor de los

bienes por ubicarse dentro del área de la mejora. Por tanto, si el artículo 6o. del mencionado decreto legislativo, reformado mediante los diversos 109, 531 y 3, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León establece que los predios destinados a casa habitación dentro de fraccionamiento autorizado no pagarán el tributo de mérito hasta en tanto cambien el uso de suelo, contraviene la naturaleza jurídica de la contribución e infringe la garantía de equidad tributaria, en razón de que tratándose de sujetos que se encuentran en igual situación jurídica, a saber, ser propietarios o poseedores de predios ubicados dentro del área de beneficio de una obra pública programada, confiere un trato diverso al eximir a ese tipo de sujetos del pago de la contribución sin existir una justificación objetiva para ello”.

(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Septiembre de 2000, Tesis: 2a./J. 77/2000, Página: 71).

Posteriormente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar la naturaleza de las prestaciones patrimoniales denominadas cuotas compensatorias precisó que con independencia de que el legislador, al tenor de la regulación examinada en aquellos asuntos, las hubiera considerado como una contribución en su especie impuesto, ello resultaba irrelevante para abordar el estudio de su constitucionalidad, concluyendo finalmente que no constituyen contribuciones y que,



ende, no se rigen por lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sin menoscabo de que en su establecimiento las autoridades competentes se deban sujetar al cúmulo de garantías individuales que sí las rigen. Del precedente respectivo derivaron, sobre dicho tópico, las tesis que llevan por rubro, texto y datos de identificación:

"CUOTAS COMPENSATORIAS. NO TIENEN NATURALEZA JURÍDICA DE CONTRIBUCIONES, EN VIRTUD DE QUE SU ESTABLECIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LAS PARTES INTERESADAS E INCLUSO, AL ACREDITAMIENTO DE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL. De lo dispuesto en el contexto normativo que rige el establecimiento de las cuotas compensatorias establecidas para contrarrestar las importaciones realizadas en condiciones de dumping, se advierte que la atribución que al respecto se confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía), no es una expresión de la potestad tributaria conferida originalmente en sede constitucional al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Locales, menos aún, de la que al tenor del artículo 131, párrafo

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el referido Congreso puede autorizar al titular del Ejecutivo Federal, ya que al encontrarse condicionada al desarrollo de un procedimiento en el que se escuche a las partes que puedan verse afectadas con su establecimiento, al acreditamiento de que las importaciones respectivas se realizaron bajo la citada práctica desleal y causaron o amenazaron causar daño a la producción nacional, y existir la posibilidad de que aun cuando se reúnan estos elementos, la autoridad deba abstenerse de crear la respectiva prestación patrimonial o revocar la fijada provisionalmente, si los exportadores extranjeros asumen el compromiso de revisar sus precios o el nivel de sus exportaciones dirigidas hacia la República mexicana, resulta patente que las citadas cuotas no tienen las finalidades propias de una contribución, que justifican que su establecimiento no esté condicionado a requisitos de esa naturaleza, ni pueden considerarse, válidamente, como una expresión de la potestad tributaria del Estado, dado que ésta constituye una manifestación unilateral emitida en ejercicio del poder de imperio cuya expresión principal constituye el dictado de normas a fin de crear tributos".



(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Agosto de 2001, Tesis: 2a. CXXII/2001, Página: 220).

"INGRESOS PÚBLICOS. PARA VERIFICAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RIGEN SU ESTABLECIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE LES DÉ EL LEGISLADOR ORDINARIO. Si bien es cierto que el legislador ordinario puede definir en cada época cuáles son las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas que existan en cada momento, atendiendo a la evolución de la administración pública y a las responsabilidades que el Estado vaya asumiendo en la prestación y mantenimiento de los servicios públicos que aseguren el desarrollo integral de los individuos que componen la sociedad, también lo es que ello no obsta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad de una prestación patrimonial de carácter público, con independencia de que formalmente se le considere como contribución o ingreso no tributario, desentrañe su verdadera naturaleza y, conforme a ésta, verifique si el contexto normativo que rige su

establecimiento, liquidación y cobro se sujeta a las prerrogativas y obligaciones que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto para los gobernados como para las autoridades constituidas, dependiendo de su naturaleza tributaria o no tributaria”.

(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Agosto de 2001, Tesis: 2a. CXXXII/2001, Página: 237).

Cabe agregar que el criterio contenido en la última tesis transcrita se ha reiterado por esta Segunda Sala al resolver por unanimidad de votos los amparos en revisión 49/2001, 583/2000 y 1070/2000, promovidos y fallados, respectivamente por Gerardo Kawas Seide, Jesús M. González Martínez y Braniff Air Freight and Company, sociedad anónima de capital variable, el veintinueve de junio, el siete de septiembre y el veintiséis de octubre de dos mil uno.

En ese tenor, tratándose de la prestación patrimonial de carácter público prevista en el artículo 5° de la Ley de Federal de Juegos y Sorteos, resulta de especial trascendencia analizar cuál es su naturaleza, pues dependiendo de ello será posible concluir si constituye una expresión de la potestad tributaria del Estado y, por ende, se encuentra sujeta a los principios de justicia tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República y, además, para su cobro coactivo no será necesario que la autoridad competente escuche previamente a los gobernados, pues tratándose del cobro de prestaciones



autoritarias, para acatar el derecho fundamental tutelado en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional basta que la ley confiera a los afectados la posibilidad de impugnar la fijación del gravamen. Sirven de apoyo a esta última conclusión, en lo conducente, las tesis que llevan por rubro, texto y datos de identificación:

“AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.

Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario ~~cumplir con la~~ garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya ~~que~~ el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa

antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos”.

(Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 66 Primera Parte, Página: 77).

“GARANTÍA DE AUDIENCIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL. No puede exigirse el establecimiento de una audiencia previa en beneficio de los afectados y en relación con la fijación de un impuesto, toda vez que esa fijación, para cumplir con los fines de la tributación, debe ser establecida unilateralmente por el Estado, e inmediatamente ejecutiva, ya que sería sumamente grave que fuese necesario llamar a los particulares afectados, para que objetaran previamente la determinación de un impuesto, lo que paralizaría los servicios correspondientes, y, por el contrario, cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la fijación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijación del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere



necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos".

(Sexta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Primera Parte, CV, Página: 85).

Al respecto, cabe señalar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como atributo o rasgo distintivo de las contribuciones la unilateralidad, tanto por lo que ve a la forma en que se ejerce la potestad para crear la respectiva prestación, como por lo que se refiere a las circunstancias que rodean la conducta del gobernado que al ubicarse en el respectivo supuesto de hecho, da lugar al nacimiento de la correspondiente obligación tributaria.

En efecto, tratándose de la unilateralidad en la creación de las contribuciones, esta Segunda Sala determinó que al constituir éstas la expresión de la potestad tributaria del Estado, el establecimiento de las prestaciones patrimoniales que tengan esa naturaleza no está condicionado a que se desarrolle un procedimiento en el que se escuche a los gobernados que podrían ver afectado su patrimonio con motivo de la creación de un tributo y, menos aún, a que el órgano dotado de tal potestad acredite determinadas circunstancias de hecho que justifiquen su ejercicio, como deriva de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV, 71, 72, 73, fracciones VII y XXIX, 74, fracción IV, 115, fracción IV, 116, 117, fracciones

IV a VII, 118, fracción I, 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b) y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular resulta ilustrativa la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"CONTRIBUCIONES. CARECEN DE ESTA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO CUYO ESTABLECIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LOS GOBERNADOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS Y A QUE EL ÓRGANO INVESTIDO DE LA RESPECTIVA ATRIBUCIÓN ACREDITE QUE DETERMINADOS HECHOS DEL PASADO JUSTIFICAN SU CREACIÓN. Si bien es cierto que la potestad tributaria en su expresión positiva, consistente en establecer contribuciones, resulta indispensable para captar los recursos necesarios para financiar las actividades estatales y debe ceñirse, por regla general, a un proceso legislativo, también lo es que su ejercicio no está condicionado a que se desarrolle un procedimiento en el que se escuche a los gobernados que podrían ver afectado su patrimonio con motivo de la creación de un tributo y, menos aún, a que el órgano dotado de tal potestad acredite determinadas circunstancias de hecho que justifican su ejercicio. Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 31,



fracción IV, 71, 72, 73, fracciones VII y XXIX, 74, fracción IV, 115, fracción IV, 116, 117, fracciones IV a VII, 118, fracción I, 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b) y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen que la potestad tributaria, para su desarrollo, se encuentra sometida, en principio, a ser ejercida mediante un acto formalmente legislativo que, generalmente, debe sujetarse a un proceso de iniciativa, deliberación, aprobación y promulgación, destacando que en estas etapas las autoridades competentes no se encuentran obligadas a escuchar a quienes podrían ver afectado su patrimonio con la contribución respectiva, ni a acreditar los hechos acontecidos en el pasado que justifican la creación de ésta. Además, si bien las citadas contribuciones deben cumplir con los requisitos de proporcionalidad, equidad tributaria y encontrarse destinadas al gasto público, ello no condiciona al respectivo órgano legislativo a acreditar que hechos sucedidos en el pasado justifican su establecimiento, pues el cumplimiento de estos requisitos materiales no guarda relación con los motivos que llevaron al legislador a crear la contribución. En el mismo tenor, aun cuando en la propia Constitución Federal se establecen algunas limitantes a las fuentes de riqueza que pueden ser gravadas por el Congreso de la Unión y por las



Legislaturas Locales, ello no implica, en manera alguna, que antes de crear un tributo deban acreditarse las circunstancias que lo justifican. En consecuencia, se afirma que las prestaciones patrimoniales de carácter público, cuya creación se encuentra condicionada al desarrollo de un procedimiento en el que se escuche a los afectados y al acreditamiento de ciertos hechos, no constituyen una expresión de la potestad tributaria del Estado, sino de una diversa atribución que tiene como finalidad crear una carga económica a todos aquellos que realicen una actividad que se estima contraria a algún bien jurídico que a juicio del legislador debe tutelarse, pero que no están destinadas a solventar el desarrollo de actividades propias del Estado, por lo que a tales prestaciones no debe exigírseles el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia tributaria ni para su cobro puede la autoridad competente omitir otorgar a los gobernados su derecho de defensa previo a la emisión del acto que les prive en definitiva de su patrimonio”.

(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Agosto de 2001, Tesis: 2a. CXVII/2001, Página 214).

Por otra parte, en relación con las prestaciones patrimoniales respecto de las cuales el nacimiento de la obligación de pago está vinculado con un determinado acto del



Estado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si aquélla reúne el requisito de unilateralidad y, por ende, constituye una contribución, es necesario analizar cuál es la naturaleza de la relación jurídica, suscitada entre los gobernados y el Estado, al seno de la cual surge la respectiva obligación de pago. Al respecto resulta ilustrativa la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"APROVECHAMIENTO. TIENE ESE CARÁCTER EL QUE DEBE PAGARSE POR CONCEPTO DE LOS INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS (TRATÁNDOSE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO, ALMACENAJE Y CUSTODIA DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR, POR LO QUE NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ADUANERA). Si se toma en consideración, por un lado, que la carga económica del cinco por ciento de los ingresos brutos obtenidos por la prestación del servicio de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior que establece el artículo 15, fracción VII, de la Ley Aduanera, tiene su origen en la concesión que el Estado otorga a los particulares para que presten el referido servicio y, por otro, que uno de los elementos de la concesión es el contrato a través del cual se protegen los intereses del particular concesionario creando a su favor una situación jurídica individual,

de manera que para estar en aptitud de prestar el servicio público que da origen al gravamen, interviene la voluntad del concesionario, y no se fija unilateralmente por el Estado, es claro que el ingreso de mérito constituye un aprovechamiento, tanto por la denominación que le da el ordenamiento en cuestión, como por su naturaleza, ya que establece un ingreso del Estado por funciones de derecho público diverso a las contribuciones y, por ende, los principios tributarios de proporcionalidad, equidad y legalidad no le resultan aplicables".

(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Diciembre de 2001, Tesis: 2a. CCXVIII/2001, Página: 364).

Por ende, tratándose de prestaciones patrimoniales cuya obligación de pago nace para los gobernados con motivo de la realización de un determinado acto por parte de un órgano del Estado, ello no basta para estimar que se trata de contribuciones, pues es necesario analizar cuál es la naturaleza de la relación jurídica que subyace a esa obligación de pago, ya que dependiendo de ello y de la índole de las atribuciones que desarrolla el respectivo órgano estatal al emitir el acto o realizar la conducta que genera la correspondiente obligación de pago, se podrá advertir si ésta surge dentro de un vínculo en el que el Estado acude investido de imperio o si bien tiene su origen en una relación de coordinación que se da entre el respectivo órgano estatal y los gobernados.



Cabe agregar que tal distinción ha sido tomada en cuenta, incluso, por el legislador ordinario, al establecer en los artículos 2° y 3° del Código Fiscal de la Federación la distinción entre los derechos, prestaciones patrimoniales de carácter tributario, y los productos, ingresos no tributarios, al disponer:

“Artículo 2° Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

.....

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público...”

“Artículo 3°

Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado....”

Ante ello debe precisarse que las notas características o esenciales de las contribuciones denominadas derechos son las siguientes:

➤ Los derechos tienen su fuente en la voluntad unilateral del Estado.

➤ No emanan de un acuerdo de voluntades entre el Estado que presta el servicio y el contribuyente que lo recibe, sino que el hecho generador surge cuando se actualiza la hipótesis prevista en la ley.

➤ Son de carácter obligatorio.

➤ Tienen como presupuesto la prestación de un servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho público, el cual debe ser de naturaleza divisible, individualizable y susceptible de medición.

➤ Se rigen por los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal.

➤ Se destinan al gasto público.

Ahora bien, con el propósito de profundizar en las diferencias que existen entre las contribuciones denominadas derechos y los ingresos públicos identificados como productos, se recurre a la doctrina que se ha ocupado de establecer dicha distinción, lo que brinda elementos que coadyuvan a la resolución del presente asunto, tal como deriva de la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA



CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.". Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige

un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen.

(Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Mayo de 2001, Tesis: 2a. LXIII/2001, Página: 448)

En primer término es oportuno precisar que las contribuciones que el artículo 2º del Código Fiscal de la Federación identifica como derechos, son denominadas por ciertas legislaciones extranjeras como "tasas", según lo señalan,



...y otros autores, Sergio Francisco de la Garza en su obra Derecho Financiero Mexicano y Emilio Margain Manautou, en su libro Introducción al Estudio del Derecho Tributario, quienes al referirse al particular expresan, respectivamente, lo siguiente:

"...Uno de los criterios es el de hacer pagar a los que reciben un servicio en ocasión y como contraprestación de ese servicio. Esto es lo que ha dado lugar a un tributo que se llama tasa... A esta especie de tributo se le llama tradicionalmente en México "derecho" y en los países sudamericanos, España e Italia: tasa..."

"Los tratadistas están de acuerdo en que la figura jurídica tributaria denominada tasa o taxa, llamada "derecho" en nuestra legislación fiscal federal, es la mas difícil de caracterizar..."

Así mismo, es necesario puntualizar que por lo que se refiere a los ingresos denominados productos, la doctrina se refiere a ellos como precios públicos, según deriva de la referencia que ellos hacen los autores que mas adelante se mencionaran y en particular de la de Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano, Gabriel Casado Ollero y José M. Tejerizo López, coautores del libro "Curso de Derecho Financiero y Tributario" que indican:

"... Se han clasificado como precios públicos, las contraprestaciones satisfechas por la prestación de

servicios o realización de actividades en régimen de derecho público cuando es voluntaria su solicitud o recepción y ese servicio es prestado o la actividad es realizada por el Estado o por el sector privado..."

Así las cosas, la diferenciación que los tratadistas que se citan enseguida, hacen entre tasas y precios públicos, debe ser entendida, aplicada a la legislación positiva que impera en nuestro país, como la existente entre derechos y productos.

Sobre el particular, Rosa Litago Lledó, en su libro "La recaudación de los precios públicos" señala, entre otras cosas, las siguientes:

"Desde el punto de vista jurídico la polémica se centra básicamente, en la distinción entre tasa y precio, más concretamente, entre tributo y precio. Distinción que alude -partiendo de su diferente naturaleza- únicamente a su dispar régimen jurídico, y que acarrea importantes consecuencias jurídicas, por cuanto la tasa, como es bien sabido, es un tributo, no así el precio público.--- La tasa se diferencia del precio público por la concurrencia de dos notas: a) Es una obligación ex lege, que no tiene su causa en un contrato, a diferencia de lo que ocurre con los precios públicos; b) Origina un ingreso de Derecho público que supone la aplicabilidad de una serie de prerrogativas o



privilegios propios de este régimen jurídico, como son la vía de apremio, las garantías del crédito tributario, la presunción de legalidad, etc. Estando claras las diferencias conceptuales, la tasa y el precio tiene, empero, un rasgo en común, y es que ambos constituyen recursos adecuados para proporcionar ingresos a los Entes Públicos, cuando éstos, mediante la prestación de servicios o la realización de actividades, se dirigen a la satisfacción de necesidades públicas de los particulares de forma individualizada. Llegando a este punto, la cuestión que tradicionalmente se ha suscitado es la relativa a la existencia o no de un criterio general que, ante los pagos ocasionados por los conceptos anteriores, permita dilucidar si nos hallamos ante uno u otro tipo de ingreso. Históricamente han sido múltiples los criterios que se han intentado utilizar, de entre los que podemos citar: el carácter de servicio público, la esencialidad del mismo, su necesidad, el interés público presente en la realización del servicio o la actividad, el modo de gestión [...] Ninguno de los cuales, empero, ha resultado aplicable sin reservas, por dos razones. En primer lugar, por la dificultad inherente a la exacta delimitación del servicio público frente a la simple actividad administrativa. -- A ello hay que sumar, en segundo lugar, la crisis actual del criterio enunciado, por efecto del creciente intervencionismo del Estado en la vida

económica.--- La exacta delimitación entre prestación de servicio público de la simple actividad comercial o industrial de la Administración se plantea en términos de su posible reconducción al ámbito de Derecho Financiero. Posibilidad que se traduce en la necesidad de acercamiento de los primeros a las categorías tributarias, con lo que se conseguiría su subsunción en los principios de justicia tributaria - pese a la dificultad que éstos adquieren al proyectarse sobre figuras distintas del tributo, pues fundamentalmente se asimilan a las tasas-, y que se presenta más distante en el supuesto de la mera actividad económica de la Administración.--- De ahí que pueda concluirse en la inexistencia de un criterio general, válido, de distinción al que pueda atribuirse una influencia decisiva y constante sobre el carácter jurídico de las relaciones en cuestión, debiendo convenirse que, en todo caso, la elección de una u otra figura constituye una opción política del legislador.--- Como en su momento resaltó el maestro A.D. GIANNINI, es vano querer encontrar a toda costa un criterio material, visible y seguro de discriminación en una materia en la que domina el arbitrio del legislador y en la que todo se reduce, por tanto, a establecer la impronta que éste haya dado a las relaciones que son objeto de su regulación. --- En otro orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que el estudio de la



naturaleza jurídica de los precios públicos tiene que realizarse necesariamente de modo conjunto con la tasa. La principal razón que avala la anterior afirmación la constituye el hecho de que mediante esta regulación legal se ha operado la escisión del hecho imponible de las tasas para dar lugar a los precios públicos, concluyéndose así en la existencia de dos tipos de recursos diferentes.---

STS de 2 de marzo de 1994, FJ 3.º, <[...] los precios públicos son recursos de las Haciendas Locales de nueva implantación y conceptualmente distintos de las tasas, de las que proceden a través, entre otros, de un mecanismo de escisión al tomar de ellas un elemento del hecho imponible tan característico como la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal que a partir de la Ley 39/1988 ya no exigirá como tasa, sino como precio público>.--- La dificultad inherente a la distinción entre tasa y precio público, puesta de manifiesto en la insuficiencia de criterios definitivos que operen tal distinción, conlleva, asimismo, la dificultad en la elección del criterio de estudio -conjunto- de ambas figuras, planteándose inicialmente la conveniencia en la adopción de un criterio formal.--- Es el caso de Martínez Giménez quien lo considera un modo adecuado en el análisis de la verdadera naturaleza de los precios públicos, si bien, matiza la contraposición de la elección de este criterio con el carácter sustancial,

actualmente admitido en el estudio de los modos de financiación de la Hacienda Pública.--- De modo que, vista su configuración legal, de ella se extraiga el régimen jurídico que se atribuye a unos y a otras, para, a posteriori, dilucidar si nos hallamos ante una tasa o un precio público. Esto es, si las prestaciones aludidas atienden a un régimen jurídico tributario de Derecho público y naturaleza contributiva, encontrándose en presencia de una tasa, o por contra, se enmarcan en una relación jurídica de naturaleza contractual, no contributiva, es decir, un precio. --- <En consecuencia, cuando del conjunto de las normas positivas que regulan una determinada relación se desprende que ésta ha sido configurada con arreglo al esquema del contrato, la prestación del usuario tiene carácter privado; cuando, por el contrario, resulte que con arreglo a la regulación legal de la relación la fuente, de las obligaciones de las partes deba reconducirse, no a la voluntad de éstas, sino directamente a la ley, la prestación del particular asume el carácter jurídico de tasa.>"

Por otra parte, Fernando Pérez y Royo, en su obra "Derecho Financiero y Tributario" Parte general, comenta en lo conducente:

"... En cuanto a la definición del concepto legal de tasa, reproducimos el texto del artículo 26.1.a) de la LGT: <Tasas son aquellos tributos cuyos hechos





imponibles consisten en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca alguna de las circunstancias siguientes:--- Primera. Que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados:--- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.--- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.--- Segunda. Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.--- Esta definición ha sido establecida por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público. Esta Ley supone la culminación de un recorrido que comenzó con la Ley de Tasas y Precios Públicos de 13-V-1989, la cual modificó el concepto de tasa que figuraba en la LGT desde 1963. Originalmente la LGT definía la tasa como un tributo exigido por la utilización o aprovechamiento especial del dominio público o por la prestación de

servicios que afecten o beneficien de manera particular a sujetos determinados. La LTPP antes citada estableció una nueva definición. En ella se hicieron salir del ámbito de las tasas, por un lado, los supuestos de utilización o aprovechamiento especial del dominio público y, por otro, los correspondientes a determinados servicios públicos: aquellos en los que no concurrían las circunstancias de ser servicios o actividades públicas de recepción obligatoria y, además, reservados al sector público.--- Las prestaciones exigibles en función de estos supuestos excluidos del ámbito de las tasas pasaron a tener la consideración de precios públicos, nueva categoría de ingreso de Derecho público....”

Finalmente, Ramón Valdés Costa, autor uruguayo, en su libro “Instituciones de Derecho Tributario”, señala:

“... En nuestro derecho positivo los conceptos de gratuidad y onerosidad se han utilizado como elementos decisivos para distinguir los tributos de los precios, entendidos estos últimos como denominación genérica de todas las contraprestaciones pagadas al Estado por las prestaciones de carácter económico que ésta realiza. Esta técnica, recogida en los arts. 10 y 12 del C.T., permite solucionar las dudas y discrepancias que registra la doctrina, que se había



manifestado incluso en la nuestra (supra, 59.2).---

Los distintos aspectos que la cuestión plantea, pueden resumirse en las siguientes proporciones:--

- 1. El criterio legal de diferenciación en base a la naturaleza económica o jurídica de la prestación estatal resulta del art. 10, inc. 2, del C.T., que excluye del concepto de tributo las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter, proporcionado por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente, en sociedades de economía mixta o "en cuestión". El criterio seguido por esta norma está confirmado por el art. 12 relativo a la tasa, que restringe el carácter de la prestación estatal a la "actividad jurídica específica del Estado".---

2. Las prestaciones de naturaleza económica que proporcionen una ventaja o provecho a la contraparte al satisfacer sus necesidades, son, en principio, retribuíbles por un precio, denominación genérica que comprende las diversas denominaciones particulares que el derecho positivo les da, como derechos, proventos, primas, peajes, intereses, matrículas, etc.--- Se trata de actividades en principio libres, que el Estado asume por razones de oportunidad o conveniencia y que pueden ser cumplidas en régimen de libre concurrencia o de monopolio, sin que esto altere

su naturaleza jurídica (art. 10, inc. 2, del C.T.).--- 3. Los servicios jurídicos comprendidos en el art. 12 son inherentes al Estado, es decir, inseparables de éste. Su elenco depende de cada ordenamiento jurídico-constitucional. En el mundo occidental contemporáneo los ejemplos típicos son la función jurisdiccional (justicia ordinaria, administrativa y penal); dentro de la función administrativa, los actos de autorización, prohibición, aprobación y registro.--- 4. La fuente de las obligaciones son, respectivamente, el concurso de voluntades y la ley (art. 1246 del C.V., y art. 2 del C.T.). La ley es la única fuente de la obligación tributaria (art. 10 de la C.); el acuerdo de voluntades es de principio en las tradiciones económicas con las excepciones que establezca la ley.--- 5. En consecuencia, son aplicables a las prestaciones estatales de contenido económico que satisfacen necesidades de quienes las reciben, las reglas del derecho privado con las mencionadas excepciones; es la solución admitida por la doctrina que, por otra parte, encuentra apoyo en el art. 14 del C.T., inc. 2. Por lo general entran en la categoría de los contratos onerosos (art. 1249 del C.C.) y son, por tanto, en principio retribuíbles, ya que se da el concepto de "ventaja o provecho", que es la causa jurídica de la obligación de pagar (art. 1287 del C.C.). En cambio, las prestaciones de naturaleza puramente jurídica, que el Estado debe realizar en



su calidad de ente soberano, son en principio gratuitas.--- 6. En virtud del criterio precedente los precios pueden ser fijados por el órgano que realiza la prestación. Esta competencia de principio está generalmente regulada, con mayor o menor precisión, la ley que organiza la actividad, atendiendo a razones de oportunidad o conveniencia, apreciadas discrecionalmente por el legislador. Esta intervención legislativa encuentra su fundamento en la protección de los consumidores o usuarios -especialmente en el caso de los servicios sociales y de las actividades desarrolladas en régimen de monopolio- frente a posibles excesos de los órganos administrativos que proporcionan los bienes y servicios.--- 7. Esa regulación adquiere en la práctica las más diversas modalidades, desde la fijación del precio o de la exoneración directamente por la Constitución o la ley, hasta el otorgamiento de las más amplias facultades."

Las transcripciones anteriores permiten sostener que la doctrina, en términos generales, ha coincidido en establecer la distinción entre derechos (tasas) y productos (precios), con base en dos elementos esenciales, a saber:

- a) Los derechos o tasas tienen su origen en la ley, en tanto, los productos o precios, si bien encuentran su origen mediato en la ley, en razón de que su percepción se encuentra

prevista en un ordenamiento jurídico tributario (Código Fiscal Federal y códigos tributarios estatales), se rige por cláusulas establecidas en un contrato cuya celebración presupone el concierto de voluntades entre las partes que lo pactan.

b) El servicio prestado por el Estado tratándose de derechos si bien requiere la solicitud del gobernado, es de naturaleza obligatoria al configurarse la hipótesis prevista en la ley como generadora del hecho imponible.

Tratándose de los productos, en otras latitudes precios, la solicitud del servicio es voluntario ya que el particular no se encuentra obligado al pago de éste por situarse en una hipótesis normativa sino por así haberlo pactado mediante la libre manifestación de su voluntad. No obstante, no queda comprendido de este concepto, la prestación de servicios que resultan indispensables, pues en dicho supuesto se está en presencia de las contribuciones denominadas derechos.

Ahora bien, partiendo de la referida distinción que atiende a la unilateralidad que subyace a la relación jurídica que se entabla entre el Estado y los gobernados con motivo de la conducta que desarrolla el respectivo órgano estatal y genera la respectiva obligación de pago, en el caso concreto, como se advierte de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la prestación patrimonial cuya constitucionalidad se reclama surge como consecuencia de la actividad desarrollada por la Secretaría de Gobernación consistente en otorgar permisos para realizar



juegos o sorteos, es decir, se trata de una prestación patrimonial vinculada a una actividad del Estado.

Además, en cuanto a la naturaleza de la actividad desarrollada por el Estado que se retribuye con la referida prestación, el otorgamiento de permisos para la celebración de juegos o sorteos, conviene acudir a lo previsto en los artículos del 1° al 4°, 7° al 10° y 15 de la respectiva ley federal, los cuales disponen:

“ARTÍCULO 1°. Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”.

“ARTÍCULO 2°. Sólo podrán permitirse:

I.- El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de domino, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes;

II.- Los sorteos.

Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de esta Ley”.

“ARTÍCULO 3°. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de

cualquier clase; así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá por su propia ley”.

“ARTÍCULO 4º. No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación. Esta fijará en cada caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse”.

“ARTÍCULO 7º. La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de esta Ley, por medio de los inspectores que designe.

Con el mismo fin podrá integrar los organismos o comisiones que estime convenientes, y los que funcionarán de acuerdo con las atribuciones que les señalen las disposiciones reglamentarias de esta Ley, así como las que dicte la citada Secretaría”.

“ARTÍCULO 8º. Se clausurará, por la Secretaría de Gobernación, todo local abierto o cerrado en el que se efectúen juegos prohibidos o juegos con apuestas y sorteos, que no cuenten con autorización legal, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que según el caso correspondan”.



"ARTÍCULO 9°. Ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo".

"ARTÍCULO 10°. Todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pública cooperarán con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones que ésta dicte de acuerdo con esta Ley".

"ARTÍCULO 15. No quedan comprendidos en las disposiciones precedentes los juegos que se celebren en domicilios particulares con el único propósito de diversión o pasatiempo ocasional, y que en ninguna forma se practiquen habitualmente, siempre que además no se admitan en los mismos a personas que no tengan relaciones de familia o trato social cercano con los dueños o moradores".

Como se advierte de lo dispuesto en los numerales antes transcritos, el legislador ha estimado conveniente prohibir en el territorio nacional los juegos de azar y los juegos con apuestas, estableciendo la posibilidad de que los gobernados realicen exclusivamente los juegos y sorteos previstos en el artículo 2° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, siempre y cuando se obtenga por parte de la Secretaría de Gobernación el permiso correspondiente, lo que revela que para el legislador se trata de

una actividad cuya realización tiene relevantes consecuencias para el orden público y debe, por ende, encontrarse sujeta a un estricto control por parte del Estado.

Ante ello, debe tomarse en cuenta que los gobernados que tengan la intención de celebrar algún juego o sorteo de los previstos en el citado artículo 2°, que no se ubiquen en la hipótesis del diverso 15 del propio ordenamiento, deben forzosa y necesariamente acudir ante la referida dependencia y solicitar la emisión del respectivo acto permisivo, para cuya expedición no basta la simple solicitud de los gobernados, sino que resulta indispensable que se reúnan los requisitos que al efecto fije esa dependencia en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 3° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para reglamentar el desarrollo de los juegos y sorteos materia de autorización.

Es decir, la relación jurídica que se entabla entre los gobernados y la Secretaría de Gobernación con motivo de la solicitud de un permiso para celebrar un juego o un sorteo no es de coordinación, sino de supra a subordinación, donde el otorgamiento de dicho acto permisivo, actividad estatal cuya realización genera la respectiva obligación de pago, no queda a la voluntad del gobernado solicitante, sino al arbitrio del órgano estatal competente, el que debe valorar si la solicitud respectiva y, por ende, los términos en que se realizará el correspondiente juego o sorteo no conllevan una afectación al orden público, lo que resulta revelador de que la referida contraprestación reúne el



requisito de unilateralidad y con ella se retribuye una actividad realizada por el Estado en sus funciones de derecho público.

En ese orden de ideas, se impone concluir que la participación que en términos del artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos deben pagar los gobernados que reciban un permiso para celebrar un juego o un sorteo constituye una contribución, en su especie derecho por servicios, por lo que su regulación sí se rige por los principios de justicia tributaria garantizados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. Sirven de apoyo a esta conclusión, en lo conducente, las tesis jurisprudenciales plenarios que llevan por rubro, texto y datos de identificación:

"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN.

Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los

derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos".

(Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Enero de 1998, Tesis: P./J. 1/98, Página: 40).

"DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este alto tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme



al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del Código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios ("COOPERACIÓN, NATURALEZA DE LA.", jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ("DERECHOS POR EXPEDICIÓN, TRASPASO, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES,

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES", Vol. CXIV, 6a. Época, Primera Parte; "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS", Vol. 169 a 174, 7a. Época, Primera Parte; "AGUA POTABLE, SERVICIO MARÍTIMO DE. EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTÓ LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CÚBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARÍTIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO", Informe de 1971, Primera Parte, pág. 71). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil



novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como "las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público" (A.R. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y A.R. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo".

(Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Julio de 1996, Tesis: PJS/41/96, página: 17).

Una vez precisado lo anterior, del análisis de los diversos argumentos planteados por la quejosa en sus conceptos de violación, esta Segunda Sala advierte que, por orden lógico, debe abordarse el estudio relativo a que el artículo 5° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos transgrede el principio tributario de legalidad,

lo que específicamente señala en la parte final de su segundo concepto de violación al sostener que:

“Aunado a lo anterior, los multirreferidos artículos 5° y 6° resultan violatorios del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que el legislador federal, está delegando en la autoridad administrativa, que en el caso en concreto es el Secretario de Gobernación la potestad tributaria; esto es así ya que el Congreso General es el único órgano estatal que puede mediante ley, determinar la forma, el monto, época de pago y demás elementos de las contribuciones como el sujeto, objeto, base gravable, tasa o tarifa; es por esta situación que el artículo 31, fracción IV, señala como obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en los términos en que dispongan las leyes y en consecuencia son éstas las que así lo deben determinar y no, como acontece en el artículo 5°, la autoridad administrativa. Así, no puede quedar al arbitrio o discrecionalidad del órgano que debe ejecutar las leyes, fijar los elementos de las contribuciones. - - - Además de lo antes señalado es clara la violación al artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal por el denominado derecho ya que específicamente no se señala el monto correspondiente a las tarifas conforme a las cuales le corresponderá a los destinatarios de la norma contribuir, sino que de





forma por demás inconstitucional se señala que dicha participación le corresponderá fijarla a la Secretaría de Gobernación”.

La importancia de abordar en primer lugar el análisis del referido concepto de violación deriva de lo previsto en la tesis jurisprudencial plenaria que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

“LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL. Las argumentaciones encaminadas a poner de manifiesto en el juicio de amparo, la existencia de una violación a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, deben examinarse previamente a las que también se esgriman respecto de la violación de las demás garantías de justicia fiscal de los tributos, dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, por lo que de no respetarse, no podría considerarse equitativa y proporcional una contribución cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley formal y material”.

(Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Agosto de 1999, Tesis: P./J. 77/99, página: 20).

En ese orden de ideas, para dar respuesta al referido concepto de violación, es conveniente partir por señalar que el principio de legalidad tributaria consiste en que las contribuciones sean establecidas mediante un acto formalmente legislativo, es decir, que provenga del órgano que tiene atribuida la función de crear leyes (aspecto formal) y en que los elementos esenciales de aquellas, tales como el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, también se encuentren consignados en la ley (aspecto material). Al respecto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales:

"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto,





objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."

(Tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo I, materia constitucional, página ciento sesenta y cinco).

"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que

se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso



concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."

(Tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo I, materia constitucional, página ciento sesenta y nueve).

De estos criterios se constata que el principio de legalidad tributaria consiste en que las contribuciones sean establecidas mediante un acto formalmente legislativo y que los elementos esenciales de ellas también se encuentren consignados en la ley.

En ese contexto, atendiendo a la finalidad y al derecho a la seguridad jurídica que se tutela en el artículo 31, fracción IV, constitucional, a través del principio de legalidad tributaria, el acatamiento de éste tiene lugar cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo todos aquellos elementos que

sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, generen al gobernado certidumbre sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué cuota, tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse.

Así, tratándose de la contribución en su especie derecho que deben enterar los gobernados que obtengan un permiso de la Secretaría de Gobernación para celebrar un juego o un sorteo, prevista en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, debe estimarse que tal como lo sostiene la quejosa, la regulación de la referida prestación patrimonial transgrede el principio de legalidad tributaria. Al efecto, conviene recordar que los citados numerales disponen:

“ARTÍCULO 5°. En los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de



Prevención Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que se otorguen”.

“ARTÍCULO 6º. Lo dispuesto en el artículo 5o se aplicará también en relación con los permisos que se concedan para efectuar sorteos, con excepción de los siguientes:

I.- Los que realicen las autoridades, instituciones educativas y de beneficencia para dedicar íntegramente sus productos a fines de interés general;

II.- Los que se celebren con fines exclusivos de propaganda comercial; y

III.- Los que se verifiquen como sistema de ventas y en los que los participantes reciban íntegramente el valor de sus aportaciones en mercancías, efectos u otros bienes”.

Como se advierte de la lectura de tales numerales, en ellos el legislador se limita a establecer cuál es el servicio gravado o hecho tasable que dará lugar al nacimiento de la respectiva obligación tributaria, en el caso la obtención de un permiso para celebrar un juego o un sorteo expedido por la Secretaría de Gobernación, sin que en tales disposiciones o en un diverso acto formal y materialmente legislativo, como podría ser lo contemplado en la Ley Federal de Derechos, se regule el procedimiento para obtener la respectiva base gravable y la

cuota, tasa o tarifa aplicable, por el contrario, en el propio artículo 5° se establece que será la referida dependencia la que fije el monto de la participación.

Cabe señalar que en relación con los derechos que se generan por los servicios prestados por la Secretaría de Gobernación, en el título segundo de la Ley Federal de Derechos, artículos del 8° al 19-K, nada se dice sobre algún derecho que deba pagarse por la obtención de los permisos en comento.

Ante ello, resulta indudable que la falta de previsión sobre la base gravable y la cuota, tasa o tarifa aplicables se traduce en una palmaria violación al principio de legalidad tributaria, pues la afectación patrimonial que el derecho en comento genera a los gobernados que soliciten el otorgamiento de un permiso para celebrar un juego o un sorteo queda al arbitrio de la autoridad administrativa, dejando en un absoluto estado de incertidumbre a los gobernados, quienes están sometidos a la voluntad de aquélla en cuanto al monto de la respectiva carga tributaria.

Por ende, ante tal deficiencia legislativa, se impone declarar la inconstitucionalidad de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en tanto que al regular la prestación patrimonial que deben enterar los gobernados con motivo de la obtención de un permiso para celebrar un juego o sorteo de los permitidos en ese ordenamiento, deja en manos de la autoridad administrativa el monto de la correspondiente afectación patrimonial e impide a los gobernados conocer con la certeza necesaria la cuantía de la obligación tributaria que surge con motivo de la realización del



alado hecho tasable, todo lo cual se traduce en un quebrantamiento del principio tributario de legalidad garantizado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

En tal virtud, al resultar fundado el concepto de violación cuyo estudio se abordó se impone conceder a la quejosa la protección de la Justicia de la Unión respecto de lo dispuesto en los numerales impugnados y, en vía de consecuencia y atendiendo a la estrecha vinculación que existe entre las normas reclamadas y sus actos de aplicación, debe hacerse extensiva la declaración de inconstitucionalidad de los referidos preceptos legales a los actos administrativos de aplicación que precisados quedaron en el primer resultando de este fallo, en la medida en que se sustentan en los referidos numerales, y que consisten en el permiso otorgado por el Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación y en la orden verbal de pago emitida por el Jefe del Departamento del Área de Sorteos de la Secretaría de Gobernación, tal como deriva de la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"LEYES, REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.

Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al

promoviente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación”.

(Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 181-186 Primera Parte, Página: 251).

Debe agregarse que resulta innecesario abordar el estudio de los restantes conceptos de violación, pues con independencia de que alguno de éstos resultara fundado, ello no modificaría los efectos de la declaración de inconstitucionalidad que se sustenta en las consideraciones antes desarrolladas, dado que en los argumentos cuyo estudio se omite también se controvierte la validez constitucional de la obligación tributaria prevista en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y de sus actos de aplicación, por lo que en el presente asunto es suficiente



este Alto Tribunal haya estimado fundado alguno de los razonamientos lógico jurídicos que impugnan la referida regulación para que con ello se imparta una justicia completa en términos de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en tanto que en virtud del respectivo pronunciamiento de inconstitucionalidad se colma plenamente la pretensión de invalidez que la peticionaria de garantías planteó ante la jurisdicción constitucional.

En abono a lo anterior, en aras de tutelar el derecho a la administración de justicia pronta y expedita garantizada en el artículo 17 constitucional, conviene agregar que los efectos del presente fallo se rigen por lo dispuesto en las tesis que llevan por rubro, texto y datos de identificación:

"LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del

quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada".

(Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Tesis: P./J. 31 5/1989, Página: 228).

"LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual



violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso".

(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Febrero de 1997, Tesis: 2a. XIV/97, Página: 347).

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Grupo Radiopolis, sociedad anónima de capital variable, respecto de los actos y autoridades que precisados quedaron en el primer resultando de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito del conocimiento y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Ausente el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por licencia concedida por el Pleno. Fue ponente el tercero de los Ministros antes mencionados.

Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:



MINISTRO JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

ONENTE:

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.